

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD AZCAPOTZALCO

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA
Area Sociología política

LA TRANSICIÓN POLÍTICA EN MÉXICO
1977-2000

TRABAJO TERMINAL
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE LICENCIATURA EN
SOCIOLOGÍA

PRESENTA:

SANDRA DÍAZ CASTRO

Enero del 2001

INDICE

Contenido	Página
Presentación	I
CAPÍTULO 1	
LA TRANSICIÓN EN EL DEBATE	1
1.1 Schmitter y O'Donnel	2
1.2 El proceso político mexicano	7
1.2.1 El enfoque institucional	9
1.2.2 El enfoque crítico	14
CAPÍTULO 2	
LAS REFORMAS POLÍTICAS, LAS REFORMAS ELECTORALES Y EL SISTEMA DE PARTIDOS.	20
2.1 Las reformas políticas	25
2.1.1 Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE)	29
2.1.2 La reforma política de 1986.	35
2.1.2.1 Objetivos de la reforma de 1986.	36
2.1.3 La reforma política de 1994.	38
2.1.3.1 Objetivos de la reforma de 1994.	40
2.1.3.1.1 Implicaciones de la reforma de 1994	41
2.2 Sistemas y reformas electorales.	46
2.2.1 Sistemas electorales.	46
2.2.2. Reformas electorales	49
2.2.2.1 La reforma electoral de 1989.	52
2.2.2.1.1 Objetivos de la reforma electoral de 1989.	53
2.2.2.2 La reforma electoral de 1993.	56
2.2.2.2.1 Objetivos de la reforma electoral de 1993.	56
2.3 El sistema de partidos.	64
CAPÍTULO 3	
EL REGIMEN POLÍTICO MEXICANO	70
3.1 Antecedentes	71
3.2 Fuentes del presidencialismo mexicano	72
3.2.1 Características del sistema presidencial	72
CONCLUSIONES	77
Bibliografía	86

PRESENTACIÓN

Desde la década de los ochenta, hay un debate en curso respecto a los cambios operados, tanto en el sistema como en el régimen político mexicanos, debidos a los acontecimientos recientes en la política nacional. Las posturas teóricas que los abordan y explican también son divergentes.

Lo mismo hay quiénes afirman que en México se vive la democracia, en tanto otros sostienen que está en curso una transición y hasta quienes postulan que no está dándose ninguna de las anteriores sino por el contrario, predomina una tendencia cada vez más marcada hacia el autoritarismo.

Tales acontecimientos integran complejidades y profundidades políticas que reclaman de un análisis sociológico que permita comprender, determinar su tendencia y quizás elaborar alguna perspectiva de futuro ante las tendencias en curso. Desde el nivel del sistema, tales complejidades son: Cultura, tradiciones, formas de vida, etc. Y desde el régimen son: reformas políticas, reformas electorales y sistema de partidos.

De ahí que uno de los temas sobresalientes en la agenda política nacional a finales del siglo XX en México, es sin duda, el debate en torno a si está en curso un proceso de Transición o determinar qué está sucediendo en la vida política nacional. Dicho debate toma diferentes orientaciones teóricas¹, a partir del tipo de análisis que se efectúe: abordado desde el régimen o desde el sistema político.

¹ Conforme a Schmitter y O'Donnell (1994), se puede hacer dos tipos de análisis referidos al régimen o al sistema político. Por su parte, Antonio Camou (1991) adopta la postura de los autores anteriores para enfatizar en que puede haber dos tipos de análisis: desde el régimen y desde el sistema. Enfatizan en el análisis desde el régimen.

Debido a lo anterior, este trabajo centra la atención en los cambios efectuados en el régimen político, como eje de análisis. El sustento teórico se apoya en los conceptos de régimen y la teoría de la transición formuladas por Schmitter y O'Donnell (1994), cuyos elementos básicos de análisis son las categorías:

- INCERTIDUMBRE
- TRANSICIÓN
- LIBERALIZACIÓN
- DEMOCRATIZACIÓN

Por otro lado, el punto de referencia son los cambios que se dieron en México para facilitar la competencia electoral a partir de las reformas de 1977, sintetizados en la Ley de Organizaciones, Partidos y Procedimientos Electorales (LOPPE), que involucraron el sistema de partidos, la reforma política y el sistema electoral.

OBJETIVO:

Determinar los fines de las reformas políticas y electorales, que se dieron desde 1977 en adelante y analizar si han tenido impacto en el régimen y en el sistema político.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El debate respecto a los cambios tanto en el sistema como en el régimen político mexicano, se sustenta desde distintos enfoques y por lo mismo, tales cambios se explican de diversas maneras, obteniendo conclusiones divergentes, que van desde las posturas que señalan que en México se vive la democracia, hasta quienes sostienen lo contrario, que en vez de la apertura o transición hacia la democracia, el

comportamiento político se enfoca hacia posiciones cada vez más preocupantes de regresión hacia el autoritarismo. De manera que el análisis de las transformaciones políticas son un tema de estudio que se puede abordar desde ámbitos distintos: desde la sociología y la política, pero también desde una perspectiva histórica que recupere como indicadores los cambios y transformaciones suscitadas desde la década de los setenta en adelante, para responder a las interrogantes: ¿cuáles eran los fines de las reformas políticas y electorales de 1977 en adelante? Y ¿De qué manera han impactado tales reformas en el régimen político mexicano?

Dichos cambios comprenden complejidades y profundidades necesarios de analizar para comprender o para determinar su tendencia. Visto al nivel del sistema tales complejidades son: **Cultura, tradiciones, formas de vida**, etc. Y desde el régimen tales elementos son: **Reformas políticas, reformas electorales y sistemas de partidos.**

HIPÓTESIS

Las diferentes reformas políticas y electorales, la ampliación del marco de participación de los partidos políticos y la nueva composición de las cámaras de diputados y senadores, expresan un ajuste de las bases del régimen político en México, para conservar intactas las instituciones y propiciarle un marco de mayor legalidad y legitimidad. En este escenario, incluso cabe la posibilidad de la alternancia en el poder sin modificaciones en el régimen político mexicano.

NOTA METODOLÓGICA

Este trabajo se desarrolló en los seminarios metodológicos del área de Sociología Política, mediante la discusión colectiva e intercambio de opiniones acerca de las perspectivas teóricas correspondientes. La información utilizada fue recabada desde distintas fuentes como la biblioteca de la Universidad y otras bibliotecas públicas y a través de la revisión hemerográfica. La discusión en grupo y la orientación del asesor son importantes, pero, las opiniones expresadas en el trabajo son de mi responsabilidad.

INTRODUCCIÓN

Por sistema político pueden comprenderse diversas maneras de integración de las instituciones que le dan forma en un momento y sociedad específicos, de manera que las orientaciones teóricas al respecto también difieren, dependiendo de los enfoques y formas a las que se refieren. En tal sentido, han aportado definiciones de sistema político Antonio Camou (1991), Schmitter y O'Donnell (1994), Giovanni Sartori (1994) y Norberto Bobbio (1981), entre otros. Sin embargo, debido a los elementos analíticos y enfoque teórico en que se sustenta, en este trabajo se apoya en la noción de sistema político conforme al cual:

"Un sistema político es la interacción del conjunto de instituciones, organizaciones y procesos políticos que dan paso a las decisiones, en comunicación e influencia recíprocas con el medio. Se compone de valores que orientan la acción política, de normas que guían el comportamiento, de

colectividades que le dan sentido y de papeles específicos que los actores y grupos políticos cumplen. Todo ello abarca el conjunto de procesos y funciones que permiten definir y alcanzar los objetivos de gobierno de una sociedad, e implica decisiones que movilizan recursos materiales y humanos y que conllevan acciones colectivas y la regulación y coordinación de las relaciones entre los actores y los grupos de actores que integran el sistema político” (Espinoza.1999:10).

En esta lógica el funcionamiento del sistema requiere que los órganos políticos gocen de cierta legitimidad, es decir que tengan una aceptación en la sociedad, aceptación que se construye mediante la participación de la misma colectividad en el proceso de toma de decisiones. Esta participación se ejerce mediante la práctica del voto y el reconocimiento del sufragio. Por otro lado involucra el ejercicio de la autoridad mediante el reconocimiento irrestricto de las facultades y competencia de cada uno de los órganos de gobierno lo que lleva a una interacción contradictoria de intereses. No obstante un sistema político democrático, debe basarse en el principio del pluralismo y respeto a la diferencia.

Bajo esta noción, por sistema político se entiende que son las relaciones e interacciones por medio de las cuales se toman las decisiones de carácter político que afectan a la sociedad en general y para imponerlas legítimamente (Espinoza. 1999:10). Sin embargo, es necesario enfatizar en que no debe entenderse como sinónimos sistema y régimen, por lo que en el nivel de la aplicación de la norma la sistematización de usos y costumbres corresponde al régimen, que es el nivel de la relación inmediata entre el gobierno y la sociedad. Esto es, que por régimen debe identificarse

"el conjunto de pautas, explícitas o no, que determinan las formas y canales de acceso a los principales cargos de gobierno, las características de los actores admitidos y excluidos con respecto a ese acceso. Esto entraña forzosamente la institucionalización; o sea, para que las pautas que definen a un régimen sean pertinentes, deben de ser conocidas, prácticas y aceptadas regularmente al menos por aquellos a quienes esas mismas pautas definen como los participantes en el proceso" (Schmitter y O'Donnell.1994:118).

Tales cambios expresan el proceso de la llamada transición, en la política mexicana. No deja de ser novedoso el tema de la transición, del cual se comienza a hablar desde los años setenta, particularmente en escritos académicos; y fue adquiriendo carta de naturalización en el lenguaje de uso común. En la actualidad, estudiantes, profesores, dirigentes políticos, funcionarios públicos y los medios de comunicación masivos utilizan indiscriminadamente el término.

Este trabajo aborda el tema de la transición desde el régimen político y para su exposición está integrado por un primer capítulo, **LA TRANSICION EN EL DEBATE** en el cual se expondrá la teoría de Schmitter y O'Donnell, destacando sus conceptos, los que a la vez son utilizados por los diferentes autores mexicanos y las posturas que cada uno de ellos formula respecto al tema.

En el segundo capítulo, **LAS REFORMAS POLÍTICAS, REFORMAS ELECTORALES Y EL SISTEMA DE PARTIDOS** se expondrán y analizarán las diferentes reformas políticas que se han implementado a partir de 1977. La Ley de Organizaciones Partidos y Procedimientos Electorales (LOPPE) es la "materialización" de una de las reformas que de algún modo contribuyeron a replantear la vida política del país,

Además de sus repercusiones tanto en el sistema electoral como en el sistema de partidos.

En el capítulo tres **EL REGIMEN POLÍTICO MEXICANO** se aborda el régimen político, desde sus antecedentes, formación y las características del sistema, en función del sistema presidencial mexicano; presentando en un apartado final las **CONCLUSIONES**.

Capítulo 1

LA TRANSICION EN EL DEBATE

El tema de la transición en la política nacional cobra importancia y significación ante el triunfo electoral de un candidato presidencial distinto al del partido del gobierno, después de 71 años; durante los cuales fueron los candidatos de la primera organización quienes se alzaron siempre con la victoria, por cualquier medio. La transición entonces, sigue siendo un pendiente en la agenda de la reforma del Estado, en torno al cual se expresan y concluyen opiniones encontradas en más de los casos y diversas y aún contrarias posiciones teóricas e ideológicas, debidas quizás a las formas y metodología seguidas para analizar los acontecimientos y establecer con precisión los límites entre el inicio y conclusión de la denominada transición.

Por ello el tema de la transición no es novedoso, Norberto Bobbio [1987] indica que ya Aristóteles hacía un análisis de las formas de gobierno que pueden sucederse, conforme a los intereses que representan, señalando cuáles eran los más proclives o contrarios al pueblo. Es decir, el tema de la transición es una preocupación constante de los teóricos de las distintas disciplinas que analizan los acontecimientos sociales, a través del tiempo.

En la actualidad, la propuesta teórica más recurrida, respecto al análisis de la transición, es la que proponen Schmitter y O'Donnell [1994], quienes analizan los cambios políticos desde un gobierno autoritario hacia uno democrático. El concepto de transición que incorporan a su esquema de estudio es el que definen como "el

intervalo entre un régimen político y otro" (Schmitter y O'Donnell, 1994:19), cuyas implicaciones son los riesgos de no identificar adecuadamente los elementos que inciden en la transición, lo que en determinado momento se podría confundir con los cambios que no transforman de raíz el régimen político vigente; por ejemplo, el caso mexicano, cuyas reformas son orientadas por la elite en el poder generando un discurso político cuyo propósito es convencer que los cambios implementados en cada una de las reformas, son los adecuados para encausar la transición, pero que después ellas mismas se contradicen o retroceden y finalmente no se avanza bajo la lógica que propaga el mismo discurso político.

1.1 SCHMITTER Y O'DONNELL

Los autores Schmitter y O'Donnell [1994] son quienes han contribuido a la formulación de una perspectiva de la Teoría de la Transición, a partir de formas de gobierno actuales. Sus aportes más significativos se encuentran en el análisis comparativo¹ acerca de las formas de transición desde un gobierno autoritario.

Como elementos teóricos de análisis para identificar una transición, proponen una serie de conceptos claves, además de identificar el inicio de la transición en un momento específico caracterizado por una situación de INCERTIDUMBRE.

¹ Schmitter y O'Donnell (1994) abordan el tema de la transición desde dos orientaciones a partir de los factores decisivos. Señalan como elementos externos, en un conflicto internacional la derrota militar de un gobierno autoritario por uno democrático, y son las tendencias predominantes. Como elementos internos enfatizan en conflictos y motivaciones internas que constituyen elementos que expresan la incapacidad del régimen de defenderse frente a un golpe militar llevado a cabo por pequeños grupos de oficiales jóvenes.

Desde esta propuesta, por "transición se define el intervalo que transcurre entre un régimen político y otro" (Schmitter y O'Donnell;1994,19). En esta lógica, toda Transición de un régimen a otro, debe acabar con el primero para implementar uno nuevo, sea este más autoritario, democrático o inclusive una combinación de ambos. Por otro lado por "Régimen Político se entienden todas las reglas escritas y los procedimientos que se deben seguir en la lucha por el poder, respetando las instituciones existentes y que rigen, además de sancionar las omisiones y violaciones en que se incurra en dichas reglas".(Schmitter y O'Donnell;118).

Se advierte de fondo que cualquier forma de Transición se inicia en el régimen y, si no se producen los cambios radicales, inherentes a la transición, a dicho proceso se le puede llamar de cualquier manera posible mas no Transición, debido a la connotación de cambio que el concepto mismo implica.

En el trabajo de referencia, los autores, analizan la Transición desde un gobierno autoritario, culminando en regímenes democráticos, pero, se puede entender que este cambio de régimen significa la transformación de un conjunto de reglas institucionales y prácticas políticas definidas y controladas, en muchos casos discrecionalmente, por la elite gobernante.

En tal contexto político, el cambio político puede iniciar desde la misma elite gobernante, con el propósito de mantener el poder, dándole un matiz democrático o liberalizador al régimen, pero, si se sigue con esta lógica, es decir, sin la presión y participación por parte de la ciudadanía, el régimen no se transformaría sustancialmente sino que se quedaría solamente en una liberalización, es decir en

una redefinición de reglas y procedimientos, expresada en la posibilidad de creación de nuevos partidos políticos, formación de nuevos intelectuales críticos del sistema, pronunciamiento de respeto de las garantías individuales, de las cuales tendrían más peso las que se refieren a la participación electoral ciudadana solamente.

Al establecerse la garantía y respeto a las libertades individuales, la misma ciudadanía toma conciencia de su realidad política y social, a partir de lo cual surgen nuevos críticos del sistema que crean la duda o la expectativa de cambio y sobre todo, de soluciones a los problemas inmediatos.

Por lo tanto, solamente se cambia un acuerdo por otro, en el que la definición y el funcionamiento de la estructura y las prácticas se sometan a la discusión ciudadana, como ejercicio garantizado por la Constitución y avalado por la mayoría.

Por ello el intervalo de la Transición, se caracteriza por la indefinición de las reglas del juego político además de que se encuentran en una disputa entre los distintos actores políticos, asimismo porque se cuestionan los arreglos institucionales. El reto planteado en este momento es redefinir nuevas o en su defecto seguir con las reglas existentes, las cuales habrán de responder a los requerimientos del nuevo gobierno.

Si ocurre la redefinición de las reglas, es decir, si se abre el régimen político a nuevas formas de participación política de la sociedad, se le cataloga como proceso de **Liberalización**, debido a que, por lo regular, tales cambios los promueve la elite

gobernante e indica el inicio de una Transición política², entre cuyas formas de culminación figura la democracia.

En este marco, por **Liberalización**, “se entiende el proceso que hace efectivos ciertos derechos que protegen tanto a individuos y grupos sociales, de actos arbitrarios o ilegales cometidos por el gobierno o por terceros, esto es, la misma elite gobernante” [Schmitter y O'Donnell.1994:20]. La fundación o institucionalización de las instancias de seguimiento de los protocolos acerca de los derechos humanos, cobra significado capital para los propósitos del régimen, de ir construyendo un entorno de legitimidad, bajo el cual promover los cambios necesarios para no transformar el escenario de la disputa por el poder. En consecuencia, cabe la idea de que si ocurre la Liberalización, conduzca a la **Democratización**, como efecto o consecuencia y no como paso siguiente de la **Liberalización**.

En este nivel de las transformaciones, por **Democratización** “se entiende el proceso en donde las reglas y los procedimientos de participación de la ciudadanía en los actos políticos y sociales, son aplicados por instituciones que antes se regían por otros mecanismos o extendidos para incluir a personas que no gozaban de determinados derechos y obligaciones” [Schmitter y O'Donnell.1994:21]. Es decir, se le reconoce el derecho a participar en las elecciones a sectores de la sociedad que antes eran marginados de tal ejercicio, tales como las mujeres, los analfabetas, los funcionarios de las embajadas nacionales en el extranjero, los discapacitados etc.

² La transición también la analiza Samuel Huntington en su libro 1994. La tercera ola. Ed. Paidós. Barcelona. Propone el estudio de varios tipos de transición: transformación, traspaso, remplazo e intervención. En su esquema teórico, la transformación política proviene necesariamente de las elites en el poder.

El siguiente momento es el de realización del ciudadano, proceso inscrito bajo el concepto de **Socialización**, cuyos rasgos distintivos "son el reconocimiento y la participación tanto en el nivel político como en el nivel económico del individuo".(Schmitter y O'Donnell;1994,27). Esto se puede entender como la participación activa del sujeto en la toma de decisiones y en el reparto de la riqueza social, este momento sería el que los mismos autores Schmitter y O'Donnell denominan propiamente como la democracia plena. El llegar a este momento implicaría la realización del el ciudadano, en dos dimensiones:

- a) En lo político significa el pleno reconocimiento a su libre participación en la toma de decisiones que involucran a la sociedad, es decir, el pleno reconocimiento de su voluntad expresada en las elecciones.
- b) En lo social, implica la realización colectiva a través de la garantía de atención a las necesidades tales como educación, salud, vivienda; además de la implementación de una política de empleo remunerado, al nivel de las necesidades de alimentación, recreación, etc.

Dicho momento implica haber llegado a una etapa en que el proceso de la **Democratización** agotó todos sus requerimientos, lo cual llevaría a una doble **Transición** que es como definen a la Socialización. Se advierte que el eje de análisis de los autores es la **Transición política**, en torno de la cual gira todo el proceso, el cual se efectúa por la vía pacífica.

1.2 EL PROCESO POLÍTICO MEXICANO

Desde finales de la década de los setenta se vienen dando importantes cambios tanto a escala mundial como nacional y hasta lo local; en el ámbito social, cultural, económico, político y aún la geografía; cambios que indican el comienzo de una nueva era política.

Entre otros destaca el incremento de población y el movimiento demográfico, también a nivel mundial, pero, a reserva de otros cambios los que más consecuencias han acarreado a la población son los políticos, debido a que es ese rubro en donde más empeño han puesto las elites gobernantes en esta época, por construir un discurso de legitimación hacia la sociedad.

México no es la excepción. Desde principios de la década de los ochenta, los gobernantes adoptaron los principios básicos del neoliberalismo, dando paso a una nueva etapa en la historia nacional, en que se manifiestan dificultades monetarias como sociales. Aparejado a lo anterior, también se iniciaron diversos cambios políticos y culturales que han impactado de diversas maneras en la sociedad en general.

Como elemento característico, la sociedad civil empieza a mostrar un nivel de participación y organización distintos, nunca antes vistos. Esta puso a prueba la capacidad de dirección del gobierno cuyo resultado fue que lo rebasó en distintos aspectos, organizativos y sociales, a partir de lo cual se originan diversos cambios políticos expresados en el mismo discurso gubernamental. En el nuevo discurso

político se enfatiza la democratización, iniciando una nueva forma de hacer la política tanto en lo local como lo nacional.

Es asimismo cuando se pone en boga en el discurso político la transición, en referencia a un fenómeno que se vive desde años anteriores, pero que toca a su fin, conforme al discurso del momento, justamente con la asunción de nuevas medidas económicas y políticas desde el gobierno.

En dicha polémica participan varios autores. Una posición agrupa a quienes argumentan a favor de que en México se vive una transición democrática o aún más en la democracia plena, en contraparte, la posición alternativa o crítica de la anterior, agrupa a quienes llaman la atención para indicar que lejos de la democracia o la transición hacia ella, en México se está dando una vuelta hacia políticas de corte autoritario.

Los autores toman diferentes acontecimientos como elementos de análisis para argumentar a favor o en contra de la idea de que la transición en México ha comenzado y aún concluido.

Una característica de dicha polémica es que no hay acuerdo entre los participantes acerca de cuándo y con qué acontecimientos inició la transición en México, como tampoco una delimitación clara acerca de qué se aborda al hablar de la transición y mucho menos respecto de la democracia.

1.2.1 EL ENFOQUE INSTITUCIONAL.

Para los propósitos de este trabajo, el enfoque institucional es aquel que conjunta analistas cuya opinión coincide con el discurso político y con las tendencias políticas gubernamentales predominantes, quienes dan cuenta de los cambios realizados en el régimen y en el sistema como las medidas que nos llevan a una transformación definitiva. Tales autores dan razón de que los cambios suscitados orientan hacia la democracia, es decir, legitiman y justifican el proceso.

De manera que bajo esta denominación se analizarán los señalamientos de los autores para quienes en México se vive una transición o aún en la democracia, tomando en consideración los elementos analíticos y los argumentos desde los cuales construyen la posición.

En este sentido, analistas como Soledad Loaeza [1993] consideran que hay una Transición Política en curso indicando que se inició en 1963, cuando en la Ley Electoral se introdujo la figura de los Diputados de Partido [Loaeza.1993: 97].

Un primer elemento que permite el argumento de que en México la transición se lleva a cabo al menos desde 1963 en adelante, es la introducción en la Ley Electoral de la figura de los Diputados de Partido. Esta figura consistió en la asignación de un número de diputados por partido participante en los procesos electorales, bajo el principio de la representación proporcional que derivaba de haber alcanzado un porcentaje de los votos emitidos. El objetivo del diputado de partido era canalizar a través de los partidos existentes el descontento político de las clases medias que

podieran amenazar la estabilidad del sistema, al ampliar la representación proporcional, con lo cual se garantiza la estabilidad política y la conservación del régimen político vigente.

Por su parte Manuel Medina [1994] indica que la Transición política se inició con los acontecimientos políticos de 1968 señalando que "la apertura política, en un principio dirigida a todos los grupos críticos del sistema, tuvo dedicatoria especial para los dirigentes del movimiento estudiantil, hacia peticiones y demandas que el gobierno pudiera cumplir" [Medina.1994: 200]. Cuya mejor expresión es la apertura política resultante, que en un principio fue dirigida a todos los grupos críticos del sistema, y tuvo dedicatoria especial para los dirigentes políticos y sociales del movimiento social. Esta propuesta contribuye con una aproximación desde una complejidad particular de la llamada transición mexicana a la democracia que la distingue de las otras opiniones.

Ubicado en la misma línea, José Antonio Crespo [1999] identifica el inicio de la transición en 1964, debido a que fue en aquél año cuando se comenzó a liberalizar el sistema político pero, en su esquema de estudio insiste en señalarle como fecha precisa a la transición el año 1977, con la aprobación de la LOPPE. El primer momento es solamente indicativo en tanto el segundo es el definitivo, debido a la aprobación de la ley mencionada, la cual contiene los siguientes cambios:

- a) la integración de los diputados de partido y
- b) incorpora la inconformidad del movimiento de 1968.

Esta reforma política tuvo fuertes repercusiones en el sistema electoral, el cual muestra "la eficacia del sistema de partidos para canalizar el descontento por la vía legal quedó una vez más comprobado durante la reforma política que emprendió José López Portillo, diseñada con el propósito de animar la vida partidista, estimular la participación y registro de varios candidatos y la aceptación por parte de los grupos radicales de participar pacíficamente dentro de las instituciones" [Crespo.1995:23].

Por su parte Mauricio Merino (1992), indica que "todos los partidos políticos, incluido el PRI, hablan de la Transición a la democracia: de la necesidad de forjar un régimen pluralista que deje atrás el dominio casi exclusivo del partido creado por el gobierno hace 70 años. La comunidad política del país dice que el cambio es indispensable, aunque las interpretaciones sobre su forma sean muy distintas" [Merino.1992:66-69].

Asimismo sostiene que en curso hay una Transición política y no una Transición democrática. Esta Transición se inició en 1988 que fue cuando se dieron los verdaderos cambios en el sistema político mexicano, cuya característica predominante es que propone modificaciones en la práctica y cultura política predominantes sin reemplazar un régimen nuevo por otro. Siguiendo la lógica de Schmitter y O'Donnell en la definición de Transición, Merino concluye que en México sólo se ha dado una transformación.

También participa Antonio Camou (1991), quien define la "Transición como un género lógico-conceptual capaz de admitir al menos, dos especies de cambios diferenciados: la regresión autoritaria y la democratización política en sentido amplio" [Camou.1991:57]. Su noción de Transición política hace referencia al intervalo que se

extiende entre un régimen/sistema político y otro, cuya característica principal es que durante el proceso, las reglas jurídico-políticas del juego político no están plenamente definidas [Camou.1991:57].

Este autor es quien más se acerca a los conceptos de Schmitter y O'Donnell. Menciona que el concepto de Transición bajo la forma que la definen los autores no puede ser utilizado para hacer el análisis del caso mexicano, debido a que los cambios en México no cumplen con los mismos requisitos que en otras regiones de América Latina; de tal manera que lo que cabría retomar es la identificación del cambio de régimen, diferenciando entre régimen y sistema como dos conceptos distintos, que conforme a Camou, pueden significar lo mismo.

En el debate también participa Cesar Cancino [1995], quien se interesa por analizar las relaciones existentes entre el gobierno y el partido en el poder en México, la evolución reciente de las relaciones entre el ejecutivo y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la relación entre ambas estructuras de dominación.

Su análisis se centra en "la evaluación de que el autoritarismo mexicano basado en el poder indiscutido del presidente, la centralización de la toma de decisiones en el ejecutivo, la integración estatal de los sectores fundamentales del país a través del partido oficial, la combinación del control y concesiones a las clases populares y una ideología revolucionaria unificadora, aunque difusa en sus contenidos prácticos, ha sido más inclusivo que exclusivo, se ha basado más en el consenso y la negociación que en la represión abierta y permanente, poseedor de una Constitución ampliamente aceptada y de un arreglo institucional formalmente democrático"

[Cancino. 1995: 26]. Entre otros cambios destaca que la afirmación de una oposición real y organizada y la lógica de competencia generada con la liberalización política terminaron por erosionar la hegemonía del partido oficial.

Como consecuencia de estas transformaciones, el sistema político mexicano vive en la actualidad una etapa de transición política hacia formas de articulación todavía inciertas, aunque la continuidad de algunos elementos permita hablar de una mera refuncionalización del régimen en tanto el Partido de Estado cumple ciertas funciones básicas para la conservación del régimen y determinan su subordinación al ejecutivo.

Señala que los problemas que impiden la transición ya no en el sistema sino en el mismo régimen político, son: el presidencialismo, el corporativismo, el partido hegemónico y la burocracia clientelista.

Es evidente entonces que el actual régimen político mexicano no es competitivo, ni electoral, ni clientelista, porque la voluntad política presidencial y la de sus colaboradores más cercanos se reducen a una eficientización gradual contenida en reformas políticas que no modifican en lo sustancial al sistema político.

Siguiendo esta lógica, el cambio más visible se dio con la reforma de 1977. Reforma política que impulsó el presidente José López Portillo durante su primer año de gobierno, bajo la conducción política de Jesús Reyes Heróles; mediante la cual se reformó sustancialmente el sistema político para ampliar la participación política y articular la creciente diversificación de demandas de la sociedad.

El régimen del presidente José López Portillo promovió una reforma de Estado que abrió la puerta a la participación abierta a los partidos y organizaciones políticas, que

anteriormente habían actuado prácticamente en la clandestinidad. Partidos políticos sin registro, que de hecho actuaban políticamente, participaron en el plano de la propaganda y el proselitismo y en actividades de articulación de demandas, haciendo evidente con su trabajo la existencia de corrientes de opinión que buscaban cauces de expresión legítima, principalmente de partidos de izquierda³ que son los que más les preocupaban, por su ideología.

1.2.2 EL ENFOQUE CRITICO

Siguiendo con la exposición, este trabajo considera como ENFOQUE CRITICO aquel en donde los autores postulan opiniones y postura teórica diferentes y aún se contraponen al enfoque anterior, respecto del discurso político de la actualidad. A partir del análisis de los cambios en curso, señalan que no son elementos suficientes para conducir la transformación del régimen y menos del sistema sino que más bien expresan la continuidad de los cauces políticos que se viven, sin que cambie mucho. Difieren de los autores que legitiman tanto al régimen como al sistema, ante cuya postura plantean una explicación lógica de los acontecimientos políticos que se viven

³ Entre los partidos más importantes en este sentido destacan el Partido Comunista Mexicano (PCM), que tuvo una fuerte influencia en los movimientos y organizaciones obreras y campesinas de los años veinte en adelante, centralmente en la formación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) entre otros, vinculado a una ideología comunista. El otro fue el Partido mexicano de los Trabajadores (PMT), en formación en la década de los setenta, que reivindicaba una ideología de carácter nacionalista eminentemente, cuya presencia fue importante en la organización del movimiento campesino de los setenta en regiones como la Huasteca hidalguense y otros estados y cuya ideología se resume en uno de sus panfletos que decía: "Hace un chingo de años los indios éramos bien chingones, pero llegaron un chingo de gachupines y los muy hijos de la chingada hicieron mil chingaderas y desde entonces nos llevó a todos la chingada" y cuyo logotipo fue un signo prehispánico que significa movimiento.

desde los años setenta, los cuales, al igual que la opinión institucionalizada, toman como indicadores las reformas políticas que se han generado desde 1977 hasta la fecha y que le han dado un nuevo matiz y un enfoque más abierto y crítico al mismo régimen y al sistema político.

La postura en cuestión, en algunos casos y determinado momento tienen alguna coincidencia con el enfoque institucionalizado, pero sin coincidir con, ni ser parte de ella totalmente. Cabe abordar en primer término los señalamientos que hace Jacqueline Peschard [1991], quien señala que “en el curso de los últimos diez años y particularmente durante el sexenio salinista, el régimen político mexicano ha sufrido cambios importantes que han llegado a alterar su naturaleza misma, pero todavía está lejos de perfilarse claramente la nueva institucionalidad” [Peschard.1991;97].

Estas propuestas sostienen la hipótesis de que “no se cuenta con el marco normativo adecuado para operar en una auténtica democracia, pues parte de su ordenamiento fue hecho específicamente para que funcionara un presidencialismo autoritario, por lo cual, es una idea un tanto mítica la de que sólo se requiere aplicar cabalmente la Constitución de 1917 para que pueda operar la democracia” [Una constitución para la democracia; propuesta para un nuevo orden constitucional, UNAM, México,1996].

Desde una postura más crítica Otto Fernández [1993], sostiene que:

“Hoy el régimen político mexicano vive uno de sus más terribles procesos de taumaturgia política de los últimos años. Misma en donde debe jugar a “instaurar” la democracia [ya] no como un discurso formal o práctica simbólica en las alturas o intersticios y bases de poder sino que, además, está

“condenado” a expandir las formas políticas de representación y participación fuera de los módulos típicamente autoritaristas. Así como más allá de los límites hasta donde estaría interesado en “prolongarlas”. Semejante condición instaure no sólo una transición [limitada en el presente o generalizable hacia el futuro] sino además una crisis de transición⁴ [Fernández 1993:141]

Este autor al ser un crítico de los acontecimientos sociales y políticos de la actualidad, expone una forma distinta de conocer y analizar algunos de los hechos políticos que han dado pauta a la denominada transición mexicana. Señala que el mismo régimen se encuentra atrapado en sus propios discursos y mecanismos de cambio que en tal sentido serían las reformas políticas que se han generado en distintos momentos claves del régimen político. Ante tales circunstancias, indica que en vez de avanzar hacia una transición, el régimen político actual conduce hacia una intransición.

Por su parte, Demetrio Sodi De Le Tijera, señala las limitantes y obstáculos que dificultan hablar del tránsito a la democracia, son:

“Muchos de los obstáculos que han impedido el tránsito a la democracia en nuestro país: la falta de educación y cultura política, las necesidades económicas urgentes, la concentración del ingreso, la dispersión demográfica, el centralismo político y económico, la corrupción de los funcionarios públicos, el control de la información, la cerrazón de los medios de comunicación, la

⁴ Al referimos a una crisis de transición no damos por sentado que estamos frente a un modelo democrático en expansión. Más bien asumimos que la transición se tipifica por conservar mecanismos autoritarios determinantes y formas de liberalización operantes en el espacio de las élites y marginalmente en el nivel de las masas. Lo anterior implica distinguir entre la liberalización política del régimen y la democratización del sistema social en su conjunto.

debilidad de la oposición y, seguramente, otros que será necesario superar para alcanzar una verdadera democracia política. Sin embargo mientras no desmantelamos los tres pilares fundamentales que dieron origen a nuestro sistema político: el partido oficial, el corporativismo y el presidencialismo, no podrá haber ningún avance de fondo en la democratización nacional" [Sodi.1994:181].

En un plano más teórico, las dificultades que implica llevar o acoplar los conceptos de Schmitter y O'Donnell al análisis de las transformaciones políticas en México se deben a que "se han erosionado significativamente las prácticas, normas y las instituciones que durante decenios mantuvieron la estabilidad política en el país. El ajuste económico, la liberalización política y la más reciente internacionalización de las reglas que regulaban tradicionalmente la vida social y política mexicanas han afectado profundamente las normas, prácticas y los procesos políticos, mientras que las transformaciones económicas, sociales y políticas han estimulado modestos cambios en los modos de la regulación. Los cambios ocurridos en las relaciones de fuerza entre los actores y grupos políticos no han producido todavía modificaciones profundas en las prácticas regulativas del sistema" [Serrano.1995:17]. En el mismo sentido, existe la idea de que en México "se vive una inestabilidad institucional, y define a las instituciones como: aquellas reglas formales, procedimientos de conformidad y prácticas de operación convencionales que estructuran las relaciones de los individuos en diversos segmentos del cuerpo político" [Steinmo.1992:2].

Conforme a esta postura, los cambios hasta ahora sucedidos no afectan los principios básicos del régimen debido a que "las variaciones en los principios y normas implican un cambio de régimen, mientras que los cambios de reglas y procedimientos de toma de decisiones son cambios que ocurren en el régimen o cambios sistémicos. Estos últimos son reformas en la gobernación del sistema. Whitehead [1994] ha expresado considerable escepticismo en lo tocante a una transición ordenada del actual principio de operación del PRI a otro basado en la soberanía popular. Como sugiere la experiencia mexicana, las reglas y los procedimientos pueden modificarse sin que se produzca necesariamente un cambio "sistémico" [Whitehead.1994:114].

A través de estos dos enfoques, en el plano teórico, se advierte no sólo la dificultad de ponerse de acuerdo entre los distintos autores sino aun la inclinación ideológica que orienta a asumir una postura de legitimación más que de análisis crítico de los acontecimientos recientes en la política nacional.

Finalmente, pueden considerarse dos concepciones generales acerca del grado de institucionalización del sistema político mexicano, el sistema no se basa en instituciones, sino en tácticas de negociación.

A través de estos dos enfoques, se advierte la polaridad en posiciones teóricas respecto a la transición mexicana. Mientras en el primero, se advierte una postura ideológica de legitimación de los cambios en el régimen, para señalar que efectivamente los cambios están orientando una transición, de la cual inclusive se afirma que ha desembocado en la democracia; en el segundo enfoque se puede advertir una postura más crítica de los acontecimientos que sirven para fundamentar

las opiniones respecto a las distintas reformas. Esta dificultad para establecer una postura generalizada respecto a los acontecimientos en la política mexicana, obliga a recurrir, como último recurso a analizar el proceso mismo para definir una orientación y tomar una postura, ante la necesidad de plantear conclusiones.

CAPITULO 2

REFORMAS POLITICAS, ELECTORALES Y SISTEMA DE PARTIDOS

Las reformas políticas y electorales son elementos importantes en el análisis de los acontecimientos de la vida política nacional. Su importancia radica en la orientación y tendencia de los cambios que se originan en el régimen político.

Por reforma puede entenderse una reorientación de las políticas que afectan al sistema de poder; el concepto reorientación sugiere la idea de:

- a) "rectificación es aquella acción que volvería a su cause "normal" a las políticas prevalecientes en torno a la participación en el poder; lo que se desviaba se rectifica por medio de una reforma" (Aquilo.1982:402).
- b) "innovador, consistía en introducir nuevas pautas, roles, procedimientos en un sistema establecido; pero tales innovaciones no serían de tal magnitud que hicieran cualitativamente distinto al sistema sino que solamente le daría mayor eficacia y funcionalidad al sistema" (Aquilo.1982:402).
- c) "restauración, sugiere el regreso a formas olvidadas o pasadas, por considerarlas necesarias en el presente; generalmente, un tipo de reformas de esta índole es catalogada como reforma reaccionaria"(Aquilo.1982:402).

Generalmente, las reformas son realizadas por decisión del gobierno o de sus miembros prominentes, es decir de la elite gobernante, sin embargo la modificación en el régimen de participación, no deviene de la voluntad de le elite solamente sino atendiendo, de alguna manera las opiniones contrarias, esto es, las reformas

requieren un mínimo de presión de la ciudadanía para su realización. Como no hay vacíos de poder, los hombres que se hallan en él tienen que ceder posiciones o bien quitar a unos lo que darán a otros. El desplazamiento sólo se hará desde arriba desde las esferas del poder lo que no significa necesariamente que la iniciativa sea pedida por los de abajo, sin embargo cuando tal sucede, con frecuencia esa petición va acompañada de actos compulsivos porque en cierto sentido se comienza a liberar y a conceder espacios a la ciudadanía que antes no se tenían.

Las reformas se realizan de acuerdo al "régimen de poder y en concordancia básica con el régimen político existente," de tal forma que todo sistema político tiene una flexibilidad límite para reformar su estructura y su régimen de poder establecido. Todo sistema político es flexible hasta ciertos límites y dicha flexibilidad está condicionada por la voluntad de autoconservación, pues los sistemas políticos poseen mecanismos de reguladores de las nuevas demandas.

Vista de tal manera, la reforma es un proceso mediante el cual los sistemas políticos absorben las nuevas demandas, las regulan y las conservan; de tal manera que el equilibrio del sistema se conserva. Se puede afirmar, entonces, que toda reforma posee tres rasgos esenciales:

- a) "La reforma considerada como un proceso de cambio político, afecta a ciertas disposiciones y a estructuras políticas e instituciones reglamentarias que las respaldan o les son necesarias" (Aquilo.1982:404).
- b) "Segundo, las reformas se basan en el régimen de poder existente y se realizan en consonancia fundamental con el régimen político: los cambios se verifican no

con violación de los principios básicos del régimen político, sino utilizándolos, aunque un tanto adaptados, en una reforma y con una orientación distinta” (Aquilo.1982:404).

- c) “Tercero, la reforma extiende el régimen de participación más allá de la capacidad política inmediata; en este sentido, la reforma siempre tiende a ampliar el régimen de participación” (Aquilo.1982:404).

Por otra parte, las reformas no se producen solamente por petición de los de abajo ni por decisión gratuita y generosa de los de arriba; en general, las reformas implican una dosis de presión y de violencia o la amenaza de ésta. Un ejemplo de esta naturaleza, fueron los acontecimientos de 1968 en la ciudad de México, a partir de los cuales:

“Algunos observadores han interpretado la reforma política como una integración de la oposición a los cauces institucionales para que, con los límites expresos fijados constitucionalmente, los partidos de oposición puedan conducir la inconformidad activa en los marcos del control político. Sin embargo otros observadores más optimistas son de la opinión de que la ampliación en número e influencia de la oposición plantea la disminución del poder del partido gubernamental y del mismo presidente de la república y que, paradójicamente, una forma de conservar el poder y la autonomía relativa del Estado en su carácter cada vez menos peculiar” (Rodríguez.1989:50-51).

Una reforma política no puede plantearse como principal objetivo, la inclusión de partidos políticos solamente, sino también debe orientar una reestructuración de las

propuestas políticas contemplando los distintos sectores sociales, con lo cual se daría una democratización política y una ampliación de las expectativas políticas.

"En otros términos se interpreta, [que con una reforma] se trataría de incluir nuevos partidos, porque los actuales con registro definitivo han evidenciado, por un lado, incapacidad virtual para oponérsele al partido oficial y, por otro lado incompetencia para ofrecerle opciones políticas a una población creciente, inconforme con la situación actual del desarrollo capitalista en México, cuyas relaciones sociales han devenido más complejas" (Rodríguez 1989:51).

En este sentido, puede abordarse la reforma político-electoral de 1977, uno de los momentos más significativos en los cambios políticos y electorales que conformaron el proceso que finalmente desemboca en los acontecimientos del 2 de julio de 2000, en que el candidato de un partido distinto del partido del gobierno triunfó en las elecciones presidenciales para el periodo 2000-2006.

Puede mencionarse como antecedentes de dicha reforma los acontecimientos posteriores al movimiento social de 1968, concretamente el desenlace del movimiento estudiantil, los cuales originaron que el régimen considerara la necesidad de incorporar a los jóvenes a la vida política formal del país. En vistas de lo cual, en 1970 se introdujeron cambios en la legislación electoral, con la finalidad de otorgar el derecho al voto pasivo a los jóvenes, reduciendo la edad para el ejercicio de los derechos políticos y de los puestos de representación popular.

Sin embargo la reforma patrocinada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz no logró satisfacer la creciente demanda de participación; ante lo cual, en 1973, Luis

Echeverría, el presidente en turno, propició nuevas reformas electorales para asegurar la participación política por los "cauces legales".

En 1973 el electorado aumentó, debido a que se redujo la edad para obtener la condición de ciudadano, de 20 a 18 años, además, el gobierno llevó a cabo una campaña de empadronamiento masivo; cuyos efectos visibles fueron que se perjudicó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y benefició a la oposición. Los resultados electorales en aquel año arrojaron la mayor abstención hasta entonces registrada. Dichas reformas no fueron lo suficientemente visionarias, puesto que el régimen apostó a que los partidos establecidos restablecieran el equilibrio político y dejó fuera del juego electoral a nuevas y viejas organizaciones políticas. Entre las primeras figuran los grupos estudiantiles, movimientos populares y otros, en tanto entre las segundas aparecen principalmente las organizaciones políticas socialistas y comunistas, que tenían una larga trayectoria en la política nacional¹.

Tales reformas fueron superadas casi de inmediato por las circunstancias políticas nacionales, de fuertes movilizaciones sindicales y populares, las cuales hicieron necesarias nuevas reformas.

¹ Los partidos que en aquel momento carecían de registro, pero que actuaban representando diversos sectores de la población, enarbolando diversas demandas y hacían evidente su necesidad en la vida política nacional, eran el Partido Comunista Mexicano (PCM), el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), los que posteriormente devinieron en otras organizaciones partidistas.

2.1 LAS REFORMAS POLÍTICAS

Hacia principios de los años sesenta, el sistema político se enfrentó al reto de la débil participación de las minorías, ante lo cual, desde el gobierno se impulsaron las reformas a los artículos 54 y 63 de la Constitución, cuya modificación más importante fue la modificación del sistema de escrutinio proporcional junto con el de mayoría.

Ante la inquietud en que se encontraban el resto de los partidos frente al partido de Estado, el gobierno consideró prudente una reforma política que tratara de menguar estas irregularidades. Así pues, para las elecciones de 1964 se aplica un nuevo marco electoral. Ya en su periodo, el presidente Díaz Ordaz, envía una iniciativa de ley para reformar al sistema electoral mexicano con modificación a los artículos 54 y 63 constitucionales que son los que regulan la integración de la Cámara de Diputados.

DIPUTADOS DE PARTIDOS

Cuadro No 1

AÑO	PROPORCIÓN	NUMERO DE DIPUTADOS
1964	2.5%	LIMITE 20 DIPUTADOS
1967	2.5%	LIMITE 20 DIPUTADOS
1970	2.5%	LIMITE 20 DIPUTADOS

FUENTE: Tomado de Molinar, H.J. "El Tiempo de la legitimidad", en (...)Fuente. Ed. México.

Con ésta ley se inaugura una nueva etapa en la vida de los partidos políticos en México. La autorización de la elite gobernante iba a permitir que la oposición enfocara todos sus esfuerzos y recursos para ganar tantos distritos como fuera posible y obtener el mayor número de votos posibles, para tener derecho a los Diputados de Partido.

Bajo este enfoque, los partidos políticos se preocuparían por tener más y mejores candidatos, aún en aquellos distritos donde su presencia fuera escasa, lo que abriría un abanico de posibilidades electorales.

Si embargo no fue una reforma amplia sino más bien restringida debido a que no permitió, de acuerdo a la votación, el acceso de los partidos de oposición al recinto legislativo. En tal virtud, no dejaba de ser un candado que lo único que hacía era desviar la atención de los partidos políticos hacia la obtención de los 5 primeros curules que se otorgaban, dejando el camino libre al partido oficial para ganar casi de manera absoluta en total de los curules de mayoría relativa.

DIPUTADOS GANADOS Y PERDIDOS POR EL PRI 1946-1976.

Cuadro No 2

PERÍODO	DIPUTADOS GANADOS		DIPUTADOS PERDIDOS		TOTAL
	Totales	%	Totales	%	
1946-1961	903	94.6	52	5.4	955
1964-1976*	914	98.9	10	1.1	924

FUENTE: Tomado de Molinar, H.J. "El Tiempo de la legitimidad", en (...). Ed. México.

*Sólo se toma el número de Diputados de Mayoría Relativa, en los dos periodos para tener una comparación equitativa. No se toma en consideración los Diputados de Partido, por no haber participado el PRI en el reparto.

El sistema proporcional, conocido con el nombre de **diputados de partidos**, era exclusivo para los partidos minoritarios, a los que se les otorgó el derecho de poseer 5 diputaciones en caso de obtener 2.5% de la votación total y uno más, hasta un total de 20, por cada 0.5% de la votación adicional.

Es indudable que las reformas de 1963 trajeron nuevos bríos a los partidos de oposición, que encontraron un aliciente para postular un mayor número de

candidatos y llegar a quintuplicar entre 1964 y 1976 su participación en la Cámara de Diputados, en comparación con el decenio anterior. Sin embargo, estas reformas no alcanzaron a cambiar radicalmente el campo electoral; el Partido Revolucionario Institucional continuaba dominando.

Los acontecimientos políticos de la década de los sesenta, especialmente el movimiento social de 1968, originaron que el régimen considerara la necesidad de incorporar a los jóvenes a la vida política formal del país. En 1970 se introdujeron cambios en la legislación electoral, al otorgar el derecho al voto pasivo de los jóvenes y reducir la edad para el ejercicio de los derechos políticos y de los puestos de representación popular.

Sin embargo la reforma patrocinada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz no logró satisfacer la creciente demanda de participación, por lo que en 1973 el presidente en turno, Luis Echeverría, propició nuevas reformas electorales para asegurar la participación política por los cauces legales.

A pesar de la intención, éstas reformas no fueron suficientemente visionarias, ya que el régimen apostó todo a los partidos establecidos y dejó fuera del juego a nuevas y viejas organizaciones políticas a las que se les había negado la participación anteriormente.

En 1973 el electorado creció, en virtud de que los jóvenes que tenían entre los 18 y 20 años de edad obtuvieron la condición jurídica de ciudadanos. Además el gobierno del presidente Echeverría llevó a cabo un gran esfuerzo de empadronamiento masivo que indirectamente perjudicó al Partido Revolucionario Institucional y beneficio a la

oposición; los resultados electorales arrojaron la mayor abstención hasta entonces registrada.

Estas reformas fueron superadas casi de inmediato por las circunstancias políticas y nacionales, pues resulta contradictorio ampliar cauces de participación para aquellos que ya los tenían claramente en el contexto social.

Las elecciones de 1976 no sólo expresaron una crisis en el PRI, debido a la ausencia de competencia partidaria², sino también la necesidad de un cambio de sistema; por lo tanto, en 1977, el ejecutivo federal impulsó una reforma política con el propósito de ampliar la participación política y articular la creciente diversificación de demandas de la sociedad. El régimen de López Portillo impulsó una reforma de Estado que abrió la participación a los partidos y organizaciones políticas que anteriormente se habían desempeñado en la clandestinidad prácticamente.

Los principales cambios que introdujo la Reforma Política de 1977 en el sistema electoral mexicano fueron:

1. "Un sistema electoral mixto con predominio del mayoritario y con anexo del proporcional, sobre la base de grandes circunscripciones en las cuales los partidos presentarían listas de candidatos. Con tal motivo se amplió la integración de la Cámara de 400 Diputados, de los cuales 300 son elegidos por el sistema de mayoría y 100 por el de representación proporcional" (IFE.1990:2).

² El Partido Acción Nacional (PAN), atravesaba por una reestructuración interna, razón que argumentaron para no postular candidato a la presidencia

2. "Los partidos políticos adquirieron rango constitucional como entidades de interés público, se les concedió acceso permanente a los medios de comunicación, al tiempo que les fue reconocida la igualdad formal" (IFE.1990:3).
3. "Las facultades de la Comisión Federal Electoral se ampliaron al recibir atribuciones de organización y vigilancia del proceso electoral" (IFE:1990:3).
4. "Se estableció la posibilidad de obtener el registro partidario mediante el condicionamiento a los resultados electorales, fijando una cláusula mínima de 1.5% en cualquier votación federal" (IFE:1990:3).
5. "Se concedió competencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las inconformidades basadas en posibles violaciones realizadas durante el transcurso del proceso electoral federal o la calificación de las elecciones" (IFE.1990:3).

2.1.1 LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y PROCESOS ELECTORALES (LOPPE)

A partir de la vigencia de la LEY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y PROCESOS ELECTORALES (LOPPE), de 1977 hasta 1986, los procesos electorales cobraron mayor relevancia en la política nacional.

Con dicha legislación no se abatieron las tendencias abstencionistas, en cambio, canalizó la participación de sectores sociales activos, centralmente los obreros y sociedad civil, lo que se tradujo en un aumento significativo de los conflictos

electorales y del avance de la oposición, inclusive modificando la geografía política-electoral.

La principal novedad, aporte de dicha ley fue la introducción de un sistema mixto; con representación proporcional y mayoría simple, con especial énfasis en el sistema de mayoría, con 300 Diputados de Mayoría relativa y 100 más de Representación Proporcional.

**DISTRITOS DE MAYORIA RELATIVA
Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL**

Cuadro No 3

1979		1982		1985	
M.R.	R.P.	M.R.	R.P.	M.R.	R.P.
300	100	300	100	300	100

FUENTE: Cuadro elaborado por el autor en base a "Las Estadísticas Electorales de la Reforma Política" de Silvia Gómez Tagle.

Para darle funcionalidad al sistema de participación partidista en este nuevo esquema, se dividió el territorio nacional en 3 circunscripciones plurinominales. Las circunscripciones tenían un alcance territorial más allá de los distritos electorales, abarcando por lo general estados completos.

NUMERO DE CIRCUNSCRIPCIONES EN CADA ELECCIÓN

Cuadro No 4

ESTADOS	AÑOS		
	1979	1982	1985-1994
Aguascalientes	1	4	2
B.C. Norte	1	4	4
B.C. Sur	1	4	4
Campeche	3	3	3
Coahuila	2	2	2
Colima	1	4	4
Chiapas	3	3	3
Chihuahua	2	2	2
Distrito Federal	3	1	1
Durango	2	2	2
Guanajuato	1	2	2
Guerrero	1	4	5
Hidalgo	2	1	2
Jalisco	1	4	4
Edo. de Méx.	3	2	5
Michoacán	1	4	4
Morelos	3	1	5
Nayarit	1	4	4
Nuevo León	2	3	3
Oaxaca	3	3	5
Puebla	3	1	1
Querétaro	2	2	2
Quintana Roo	3	3	3
San Luis Potosí	2	1	2
Sinaloa	1	4	4
Sonora	1	4	4
Tabasco	3	3	3
Tamaulipas	2	3	3
Tlaxcala	3	1	1
Veracruz	2	3	3
Yucatán	3	3	3
Zacatecas	2	2	2
Número de circunscripciones	3	4	5
Dis. uninominales	300	300	300

FUENTE: Estadísticas Electorales de Silvia Gómez Tagle.

NOTA: El número que aparece para cada Estado, en cada elección corresponde a la circunscripción a la que pertenece.

El aporte principal de la LOPPE fue abrir el abanico político, que estaba respaldado en la invitación a los partidos políticos a participar de manera más activa en los comicios. Esto se estableció a través de dos mandatos constitucionales:

- a) "El primero estaba respaldado en el artículo 42 constitucional, que exigía que todos los partidos políticos presentaran listas regionales en todas las circunscripciones plurinominales, de lo contrario se arriesgaban a que les fuera retirado el registro" (IFE,1977:299).
- b) "El segundo, lo respaldaba el artículo 166 constitucional que decía que para presentar lista de candidatos en circunscripciones plurinominales, era condición para registrar cuando menos 100 candidatos en distrito uninominales" (IFE,1977:309)

Otros aportes de la LOPPE fueron: la conservación de la participación de todos los partidos políticos con registro en los órganos colegiados de las Comisiones Electorales, con voz y voto. Para integrar las Comisiones Locales y los Comités Distritales Electorales, se introdujo la figura de incautación para los representantes "no partidistas", también le se otorgaron a la Comisión Federal Electoral las facultades para la organización y vigilancia de los comicios, además de la facultad de conceder, rechazar o retirar el registro a los partidos u organización política que así considerara, en función de determinados requisitos. En otras palabras le quitó a la Secretaría de Gobernación las responsabilidades que desempeñaba desde 1946.

Por primera vez se reconoce a los partidos de oposición. Se puede decir que hasta cierto punto, en su momento se le consideró como una novedad puesto debido a que

por primera vez incorporó a los partidos de oposición a la contienda electoral además, todo se conduciría por la vía legal, lo cual planteaba un panorama diferente de lo que se venía haciendo en el campo electoral y la competencia partidista.

También creó la figura de Asociación política, como una alternativa más y como escaparate, para aquellas organizaciones que desearan participar por esta vía dentro en la contienda electoral y que no desearan o no pudieran aún, constituirse en partidos políticos.

Dicha ley ratificó la figura de Partidos Políticos Nacionales y mantuvo la figura de los partidos políticos regionales. Declaró a los partidos políticos como: Entidades de Interés Público, con todas las prerrogativas³ que la misma ley les asigna. Siguiendo con la lógica de que se podrían beneficiar los partidos políticos siempre y cuando se acataran las reglas que el propio partido en el poder imponía. Se le dio al poder judicial la facultad de dirimir las controversias que pudieran presentarse en el proceso electoral.

Hasta cierto punto se les reconocía como partidos políticos nacionales pero de que serviría si ninguno de ellos había participado en los cambios que generaba esta nueva reforma política que tenía su principal objetivo en el sistema electoral y en el sistema de partidos, creando nuevos enlaces y desenlaces entre los dos últimos, y tratar de conservar el poder sin cambiar de fondo el sistema presidencial ya desde entonces imperante en México.

³ Las prerrogativas que la ley establecía para los partidos eran: acceso en forma permanente a radio y televisión, disponibilidad de medios para sus tareas editoriales, disponer de recursos económicos en forma equitativa para

PARTIDOS EN EL PERIODO

Cuadro No 5

1979	1982	1985
PRI	PRI	PRI
PAN	PAN	PAN
PPS	PPS	PPS
PDM	PDM	PDM
PCM	PCM	PCM
PSUM	PSUM	PCUM
PST	PST	PST
PARM	PARM	PARM
---	PRT	PRT
---	PSD	---
---	---	PMT
7	9	8

FUENTE: Cuadro elaborado por el autor con base en "Las elecciones en México, Evolución y Perspectiva" de Pablo González Casanova y "El tiempo de la Legitimidad" de Juan Molinar Horcasitas.

las contiendas electorales, exención de impuestos, disponer de franquicias postales y telegráficas para sus actividades proselitistas.

2.1.2 LA REFORMA POLÍTICA DE 1986.

Desde que se implementaron en México las elecciones como vía civil para competir por el poder y resolver los problemas político-electorales, el partido oficial implementó una práctica que al paso del tiempo se convirtió en un rito cada vez más necesario y peligroso: asegurar a toda costa un lugar para sus dirigentes y cuadros profesionales, como representantes populares a partir de las elecciones, llámense de Diputados, Senadores o Presidente de la República. En la década de los ochenta, tal práctica se institucionaliza con una nueva modificación al reglamento electoral que le permita al PRI, seguir en el poder.

En este contexto, y ante la proximidad de las elecciones federales de 1988, se prestó la ocasión propicia para impulsar una nueva iniciativa de ley que implementara una nueva reforma electoral. El 3 de noviembre de 1986, el ejecutivo federal envió una iniciativa de ley de reforma a los artículos 52, 53, 54, 56, 60, y 70 constitucionales, la cual fue aprobada el 11 de diciembre del mismo año por el congreso de la unión. Las pretensiones de dicha iniciativa eran, entre otras cosas, transformar el viejo aparato electoral por uno más completo, legítimo e imparcial, que reconociera a los partidos políticos, la representación que por derecho les correspondía en la Cámara de diputados, es decir, el establecimiento de un marco legal.

Días después de este hecho, también envió al congreso de la unión la iniciativa de ley de lo que sería después el Código Federal Electoral, que reemplazaría a la obsoleta

LOPPE, decretando su vigencia, 18 días después de las reformas constitucionales a la ley electoral.

2.1.2.1 OBJETIVOS DE LA REFORMA DE 1986.

La función principal de la nueva ley era equilibrar la presencia de los partidos políticos en los órganos electorales; además de establecer la estructura que conduciría la elección federal de 1988 ya próxima. La reforma de 1986 posibilitó ponderar los avances y retrocesos de la reforma, en previsión de la elección de 1988.

Para el logro de estos propósitos:

- a) Se aumentó de 100 a 200 el número de diputados de Representación Proporcional, ocupándose automáticamente del 25% al 40% de la Cámara de Diputados por esta vía, (IFE.1990:3); con esta modificación se buscaba aumentar la participación de los partidos políticos de oposición en la contienda electoral y en las instancias de representación, ya que a mayor número de votos obtenidos en los comicios, mayor el número de curules conseguidos, al mismo tiempo que se amplió la representación a las minorías.
- b) Se anulan los recursos de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia y en su lugar se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, atribuyéndosele obligatoriedad a las resoluciones del mismo (IFE.1990:3).
- c) Se introdujo el sistema rotativo de integración de la Cámara de Senadores, estableciendo la renovación parcial de una proporción de sus miembros,

eligiéndose cada tres años uno de sus miembros para un periodo de seis años, por cada entidad federativa (IFE.1990:3). El aporte de esta modificación fue la integración parcial de la Cámara de Senadores, aprovechando la experiencia de una proporción, en tanto se renueva la otra parte.

Se retiró a los Partidos Políticos la figura de entidades de interés público y también las prerrogativas que por ley les correspondían (IFE.1990:3). Este elemento permite vislumbrar cómo se retrocede en aspectos que se había avanzado en materia de sistema de partidos con la reforma de 1977. Es decir, esta propuesta echa atrás un avance de la reforma de 1977.

Además se legisla para que todos los partidos puedan interponer todos los recursos de queja, postelectorales, en un tiempo perentorio, requiriendo siempre las evidencias públicas que prueben el acto impugnado.

DIPUTADOS POR SISTEMA MIXTO

Cuadro No 6

AÑO	%	REPRESENTATIVIDAD	DIP. M.R.	DIP.R.P.
1979-1985	1.5	CURUL = %VOTOS	300	100*
1988-1991	1.5	CURUL = %VOTOS	300	200**

FUENTE: Tomado de "Las Estadísticas Electorales de la Reforma política", de Silvia Gómez Tagle y "El Tiempo de Legitimidad" de Juan Molinar Horcasitas.

*Participan todos los partidos a excepción del PRI.

** Participan todos los partidos.

2.1.3 LA REFORMA POLÍTICA DE 1994.

Otra reforma que tiene un peso significativo en la política nacional fue la de 1994. La cual se dio en el contexto de cuatro hechos de gran trascendencia para el país debido a que:

- En primer lugar, tenía que ver con la “exitosa gestión” que el presidente Carlos Salinas de Gortari estaba desarrollando en el país, al amparo de los programas sociales, como Pronasol y Procampo y una política económica aparentemente bien instrumentada por medio de la cual logró consolidarse como el líder que revertiría la tendencia de atraso en que se encontraba el país. Elementos que le permitieron conseguir el apoyo de una gran parte de la sociedad civil, así también para vender su imagen de gran administrador, al resto del mundo, hasta ser considerado como el líder nato de los países subdesarrollados en Latinoamérica.
- En segundo lugar; la inteligencia mostrada por el presidente Salinas y la enorme presencia que tenía entre sus homólogos, le valieron para impulsar la firma del tratado de libre comercio entre los Estados Unidos; Canadá y México, con la idea de crear el mercado más grande del mundo, con lo que nuestro país entraría al primer mundo en los primeros días de 1994. Empero, era condición indispensable impulsar un cambio de carácter democrático, para estar al nivel de los países más avanzados del planeta.
- En tercer lugar, en el primer día de 1994, cuando todo apuntaba hacia una nueva era del destino de nuestro país, a la espera de amanecer en el primer mundo;

irrumpió en el Sureste una guerrilla integrada por indígenas mayoritariamente, la cual se encargó de despertarnos de los sueños modernizadores, pues en los altos de Chiapas, se revelaban las carencias de los indígenas tales como: analfabetismo, discriminación, miseria, explotación, abuso de poder, pobreza extrema, etc. mostrando la otra cara de la moneda, la de la realidad. Este hecho marcó en gran medida el destino de los programas y proyectos gubernamentales, y en consecuencia, también influyó en la orientación de la siguiente reforma política. Fue un movimiento armado que cimbró los cimientos de la economía y la política nacionales debido a que ocasionó grandes fugas de capitales y señaló el final del período Salinista, orillando al gobierno a replantar las formas de hacer política, al centrar los Zapatistas sus exigencias en la falta de democracia en los procesos electorales y en la ilegitimidad del entonces presidente de la República.

- En cuarto lugar, el asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, Baja California, el 24 de marzo de 1994, puso el toque final al grado de descomposición de la política que estaba sufriendo el país. Lo que originó que dentro de los círculos políticos se desatara una controversia por el poder.

Controversia que se resolvió justamente con la reforma política de 1994.

2.1.3.1 OBJETIVOS DE LA REFORMA DE 1994.

Entre otros objetivos, de la reforma de 1994 puede destacarse que se propuso:

- a) Reducir de manera importante la presencia del poder ejecutivo en la integración del consejo General del IFE.
- b) Retirar el voto de calidad que había detentado el Secretario de Gobernación, en el IFE.
- c) Restar poder de decisión a los partidos políticos, ante el IFE al quitarles el derecho de voto que antes tuvieron: A partir de esta ley tendrían voz solamente.
- d) También eliminó la fórmula de representación proporcional que tenían los partidos en el órgano electoral, estableciendo en contraparte la paridad de fuerzas, es decir, que cada partido tuviera un representante.
- e) Más aún, sustituyó la figura de los Consejeros Magistrados por la de los Consejeros Ciudadanos, quienes debían cumplir con la función de representar a la sociedad. En este aspecto también eliminó el requisito para aspirantes a consejeros, de ser abogados de profesión.
- f) En cuanto a la integración del IFE, fue estipulado que a partir de la propuesta de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados y con la aprobación de las dos tercera partes de los Diputados presentes, se elegiría quienes serían los consejeros, debiendo ser seis en total. Esta modificación en la integración del IFE reportó distintas ventajas. De entrada se redujo el peso que el PRI había mantenido en las instancias electorales al reducirse a dos sus

representantes y uno del poder ejecutivo; cuyo contrapeso fueron dos de la oposición. En otras palabras, se da un proceso de desplazamiento de los partidos políticos, para pasar a la ciudadanización⁴, lo que en los hechos significó, que los procesos electorales siguientes se revistieran de credibilidad y legitimidad al momento de calificar las elecciones. En los niveles locales y distritales se dieron estos mismos cambios; sólo que se bajó a uno el número de vocales con derecho al voto y no a dos como lo contemplaba la legislación anterior; en este caso el vocal ejecutivo podría votar en las decisiones. Se llevó acabo una revisión minuciosa de cada caso, para corregir donde existía algún tipo de anormalidad.

2.1.3.1.1 IMPLICACIONES DE LA REFORMA DE 1994

Una de las principales tareas que asumió el nuevo Secretario de gobernación (Jorge Carpizo) al tomar el cargo como presidente del consejo general del IFE, fue el de reducir los topes a los gastos de campaña, aún por abajo autorizado apenas un mes antes en el período de Patrocinio González Garrido, pasando de 700 millones de nuevos pesos aproximadamente, a tan sólo la quinta parte de ese monto, que fue de los 134 millones 460 mil nuevos pesos. Este aspecto de la reforma bien puede interpretarse como una flexibilización de las posiciones gubernamentales, al permitir la sana competencia entre los partidos.

⁴ En este sentido, Juan Molinar Horcasitas fue nombrado Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, hecho que se puede interpretar como señal positiva de apertura del sistema, por ser considerado como uno de los más fuertes críticos del sistema político mexicano.

Se dio un importante incremento del 180% a los derechos de tiempo gratuito que tenían los partidos políticos para dar su mensaje en los medios de comunicación tanto en televisión como en radio, en este último se adquirió mayor tiempo para todos los partidos con el presupuesto asignado al IFE; distribuyéndose en función de la proporción de votos obtenidos en los últimos comicios. En esta misma dirección la Cámara Nacional de la Industria de la radio y la televisión ofreció dar un comercial político gratis por cada uno que pagara el IFE. Se dieron todas las facilidades de parte la dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la secretaria de Gobernación para transmitir todos los debates que los partidos políticos consideran convenientes realizar, a través de sus canales de transmisión.

En 1993 se había acordado crear la figura de los observadores electorales nacionales, pero ante la exigencia de la oposición de abrir más el espectro, para que los organismos internacionales pudieran dar fe de los comicios, se creó también la figura de los visitantes extranjeros quiénes acompañarían a los observadores nacionales en sus tareas de observación de la elección teniendo en este sentido una función más cualitativa que cuantitativa, es decir, podrían hacer observaciones respecto a la jornada electoral en cuanto a limpieza y ambiente político, pero no podrían aportar mayores datos sobre las irregularidades en el proceso, esto dio pie para que estas elecciones fueran las más vigiladas de toda la historia política de nuestro país; porque junto a las observaciones nacionales estarían los visitantes extranjeros, los representantes de los partidos políticos y los entrevistadores de las firmas más importantes en sondeos públicos. Así mismo se amplió también el ámbito que los

observadores nacionales tenían en la reforma de 1993; ahora no sólo podrían observar la jornada electoral, sino también ser testigo de todo el proceso, antes y después de los comicios.

Otra de las preocupaciones de la oposición era que no se guardaba el secreto del voto al momento de sufragar por lo que para estos comicios se pactó colocar mamparas en cada una de las cerca de 100 mil casillas que se instalarían en todo el territorio nacional. Esto ayudaría considerablemente a que los partidos no intervinieran en la decisión del elector del momento de votar, hecho que se había constituido en una práctica recurrente del partido oficial para presionar al electorado para que se votara por él.

El problema de la tinta indeleble que se utilizaría para éstos comicios, aún no quedaba resuelta por lo que se recurrió al Instituto Politécnico Nacional, para que se hiciera una tinta a fin de evitar que los electores votaran dos veces.

Otro problema resuelto que permitiría tener mayor certidumbre y claridad en las elecciones, fue el de las boletas para votar las que por primera vez, estarían foliadas y adheridas a un talón, de tal modo que el control de los votos válidos, anulados y sobrantes, permitiría a todos los partidos conocer el abstencionismo y el porcentaje de votos para cada partido y de la votación en general. Con esto habría una concordancia entre el número de boletas emitidas y el número de electores registrados en el padrón electoral; que al resultado de las elecciones daría el mismo resultado; pues el número de boletas sin utilizar, debería ser igual al número de personas que no votaron.

En la reforma de 1993 se había conseguido que los funcionarios de casillas fueran electos a través de un sorteo de entre los ciudadanos empadronados, para erradicar el fantasma del priísmo en las casillas electorales, y darle mayor imparcialidad al proceso; empero los partidos de oposición consideraron que el PRI en la gran mayoría de los centros de votos, es decir, no es que estuvieran en desacuerdo con el partido oficial que tuviera presencia en las urnas, sino que premeditadamente fueran de este partido: Por esta razón insistieron en que para ser funcionario de casilla, era condición indispensable haber pasado por una doble insaculación o sorteo, que en principio dejaría en igualdad de circunstancia a todos los partidos, de tener la misma oportunidad de que sus simpatizantes o afiliados fueran escogidos para representarlos en las casillas, y darle de esa forma mayor transparencia a los comicios.

Por primera vez los partidos no tendrían que esperar días para saber las preferencias electorales de los mexicanos el día de los comicios por lo que se creó el programa de resultados electorales preliminares (PREP). Este sistema de informática permitiría a los contendientes saber las tendencias, de cada partido el día de los comicios, de acuerdo a como fuera fluyendo la información, sólo que este programa se aplicaría únicamente para conocer los resultados para presidente de la república y no para el resto de los cargos públicos sometidos a la elección. Esta facultad de realizar estos estudios le fue conferida al Director General del IFE, quién podrá contratar su realización y hacerlo público sólo si el consejo general así lo acuerda. Sin duda alguna

que este instrumento permitiría dar a conocer tendencias que serían muy difíciles de revertir dejando poco espacio para el fraude de segundo nivel.

En esta nueva reforma los partidos pusieron especial énfasis en la elaboración de un nuevo padrón electoral, que contemplara una credencial para votar con fotografía, así como la actualización para 47.5 millones de ciudadanos en edad de votar, teniendo al final una cobertura de 45 millones de micas. Para comprobar su confiabilidad se le hizo una auditoría externa a las credenciales y a las listas nominales de los electores, a petición de los partidos de la oposición; la vigilancia de la auditoría de un consejo técnico, compuesta por los mexicanos más distinguidos en el área profesionalista y científica electos por consenso por los partidos políticos quienes consideraron su capacidad e imparcialidad. Estas auditorías consentidas por parte del gobierno PRI fueron recibidas como una buena señal de apertura, porque parte de las discusiones radicaban en el supuesto "rasurado del padrón electoral", que afectarían las probabilidades de los partidos políticos de oposición de obtener un porcentaje mayor de votos en los próximos comicios, pues consideraban que sus electores eran retirados del padrón electoral, en beneficio del gobierno y del partido.

En ese mismo sentido, se permitiría el acceso a los partidos a la base de datos del registro general de electores, para verificar que estuvieran incluidos en el mismo. Con esto se intentaba acotar más el terreno de los fraudes, pues cada elector tendría marcada la sección y el número de distrito electoral en que deberá votar de tal modo que sólo en esa sección podría votar, por ser el único lugar donde aparezca registrado.

2.2 SISTEMAS Y REFORMAS ELECTORALES

Los regímenes políticos utilizan distintos procedimientos para elegir a los representantes populares o para designar autoridades, para lo cual recurren prioritariamente a las elecciones. Tales procesos están integrados por dos niveles que son el conceptual, que designa los tipos de elección y las leyes electorales que ordenan y conducen el proceso electoral mismo. Para diferenciar el nivel conceptual que corresponde a los sistemas electorales de su implementación en las leyes electorales, se expondrán las principales características de los sistemas electorales predominantes las leyes electorales, centrando la atención en las reformas efectuadas de 1977 en adelante.

2.2.1 SISTEMAS ELECTORALES

Los sistemas electorales se componen de reglas y procedimientos destinados a regular las diversas etapas de los procesos de votación, entre otros aspectos deben establecer: ¿Quiénes pueden votar? ¿Quiénes pueden ser votados? ¿Cuántos votos debe emitir cada elector? ¿Cómo pueden y deben desarrollarse las campañas de propaganda y difusión? ¿Cuántos representantes se eligen en cada demarcación electoral?, etc.

Esas son las funciones básicas de los sistemas electorales, son las circunstancias que la ley electoral debe prever y resolver. La literatura especializada identifica tres modalidades básicas de sistema electoral. Se trata de tipos ideales que en su forma

pura se aplican sólo en algunos países. Sus características básicas, sin embargo, los han hecho centro de una aguda polémica que se produce cada vez que se discute cuál de los sistemas electorales es el mejor.

- a) De mayoría relativa. Es predominante en los países de habla inglesa. Normalmente se aplica en distritos uninominales, es decir, en las partes en que se divide un país para elegir a un sólo representante popular, por mayoría, en cada una de ellas. Cada elector tiene un voto y el candidato que obtiene mayor número de votos gana, incluso si no gana la mayoría absoluta. Se conoce también como sistema de mayoría simple. El sistema de mayoría tiene una variante, que pretende asegurar que el triunfador en las urnas tenga en realidad el apoyo de la mayoría de los votantes.
- b) Representación proporcional. El sistema de representación proporcional ha sido el contrincante tradicional de los sistemas de mayoría simple. La representación proporcional intenta resolver el problema de la sobre y sub-representación, asignando a cada partido tantos representantes como corresponde a la proporción de su fuerza electoral. Tradicionalmente se aplica en demarcaciones o circunscripciones plurinominales, estas son las regiones o zonas en que se divide un país para la elección de representantes populares por el mecanismo de representación proporcional⁵.

⁵ Los críticos del sistema proporcional argumentan que, si bien los órganos de representación electos por ese medio pueden ser un fiel reflejo del estado de opiniones de la ciudadanía en un momento determinado, no tienen un mandato específico para normar la acción legislativa y/o gubernativa. Hay otra objeción importante a los sistemas proporcionales: el orden en las listas de candidatos es establecido básicamente por los dirigentes de los partidos políticos, así el ciudadano pierde en realidad el derecho de elegir a su propio representante; su adhesión

- c) Sistemas mixtos. El sistema de lista adicional es una de las variantes de los llamados sistemas mixtos. Por lo regular se trata de sistemas que mezclan elementos de los mecanismos de mayoría y de representación proporcional. Tienen además una particularidad fundamental: la sección del órgano legislativo que se elige por representación proporcional está pensada como una adición que pretende compensar la desproporción de la representación elegida por medio de la mayoría relativa, pueden existir muchas variantes de este tipo de sistemas. Dentro de sus elementos básicos, la determinación de los porcentajes mínimos de votación para participar en la distribución de la lista adicional es quizá de los elementos más importantes, como también lo es la participación o no del partido mayoritario en la distribución⁶.

En México, hasta 1994, la función electoral estuvo a cargo de autoridades gubernamentales, de la Secretaría de Gobernación, es decir, que básicamente han sido los poderes Ejecutivo y Legislativo quienes resuelven desde la organización hasta la entrega de resultados de las elecciones. Por su parte, desde el siglo pasado el Poder Judicial se ha manifestado poco dispuesto a participar en controversias partidistas por cuestiones electorales.

es a un partido, a un programa, más que a un candidato determinado, lo que en algunos casos, puede contravenir la voluntad del electorado.

⁶ En México, el sistema mixto que estuvo vigente de 1978-1986, fue regido por la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE).

Sin embargo, en los años recientes los ciudadanos y los partidos políticos ya participan en los organismos electorales⁷, con el propósito de coadyuvar con las autoridades correspondientes a garantizar la efectividad del sufragio, la transparencia e imparcialidad de las elecciones.

2.2.2. REFORMAS ELECTORALES

En México ha habido una serie de reformas tanto políticas como electorales. Es difícil establecer los límites entre cada reforma sin embargo, es posible diferenciar unas de otras debido a que las primeras inician en aspectos políticos eminentemente, como por ejemplo, la reforma de 1977 conocida como la LOPPE, que modificó la edad electoral, el registro de organizaciones y partidos políticos hasta entonces no registrados, entre otros aspectos políticos específicamente, pero también tuvo repercusiones en aspectos electorales, por ejemplo, el establecimiento de las circunscripciones electorales, cuya finalidad era redefinir el territorio del país, con fines electorales, entre otros muchos. Por su parte, las reformas electorales tienen como fin central modificar la ley electoral, por ejemplo establecer el mandato de la elaboración de credenciales de elector, con fotografía, el registro en el padrón electoral, etc. De ahí que se pueda hacer la diferencia, con fines analíticos, entre reforma política y reforma electoral, correspondiendo a las primeras, aquellas

⁷ En la Constitución General de la República se establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se ejerce por los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, con la participación de los partidos políticos nacionales y de los ciudadanos, según lo disponga su ley respectiva.

reformas que inician en aspectos políticos pero que tienen alcances electoral, en tanto por reforma electoral se puede entender aquellas que solamente influyen en lo electoral, tal es el caso de las reformas de 1989 y 1993.

De ahí que abordarlas por separado implicaría una repetición de las reformas políticas, porque como se ha señalado, al implementar las reformas políticas se reforman también las instancias electorales y por lo tanto el sistema de partidos. Estos elementos integran el sistema electoral, entendiendo por sistema electoral los mecanismos encargados de resolver la necesidad de traducir en representación política el principio de soberanía y la voluntad ciudadana expresada mediante el voto. Los sistemas electorales son el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de representación política, las múltiples voluntades que se expresan mediante la marca de cada votante en una boleta forman parte de un complejo proceso político regulado jurídicamente y que tiene como fin establecer con precisión el o los triunfadores de la contienda, para conformar los poderes en sus distintos niveles, en una nación. El sistema electoral entonces, funciona como un de recuperación de los "votos y arroja órganos de gobierno y/o de representación legítimos. En ese sentido es una estructura intermedia del proceso a través de la cual una sociedad democrática designa a sus gobernantes. Los extremos que lo enmarcan, a su vez, forman parte de complejas realidades que en sí mismas ofrecen un vasto universo de análisis" [Valdes.1997:9].

Con la preponderancia del sufragio en el mundo moderno, también se hizo vigente la costumbre social mediante la cual los ciudadanos intervienen en la selección de sus

gobernantes. De ahí la democracia adquirió su adjetivo funcional, ampliamente recurrido en la actualidad: DEMOCRACIA REPRESENTATIVA, que significa el principio ciudadano de transferir o delegar el principio de soberanía en otras personas, quienes asumen la responsabilidad de tomar las decisiones que ordenan el comportamiento político de la sociedad. Los actores del proceso electoral moderno son:

- a) Los votantes,
- b) Los candidatos,
- c) Los partidos políticos,
- d) Los medios de comunicación,
- e) Las autoridades que organizan el proceso;

Los procesos se ordenan a través de los procedimientos para la conformación de la lista de votantes, la realización de las campañas de difusión, la instalación de los lugares de votación, la emisión y conteo de los sufragios y, finalmente, la resolución de los conflictos que se puedan presentar durante y después del acto electoral.

Los objetivos más importantes de las reformas electorales son:

- Crear una ley electoral actualizada, transparente y creíble; abrir nuevos espacios para la participación política de todos los mexicanos;
- Fortalecer la pluralidad política, al garantizar el acceso de las minorías tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores;
- Dotar al tribunal Federal Electoral de una amplia autoridad jurisdiccional, en tanto órgano independiente responsable de garantizar la legalidad de las elecciones.

El proceso electoral tiene enorme importancia en el mundo moderno debido a que por su conducto se verifican los resultados para constatar los comportamientos

electorales de los partidos políticos, por lo tanto debe satisfacer y responder múltiples cuestionamientos de manera clara y convincente.

2.2.2.1 LA REFORMA ELECTORAL DE 1989

A raíz de los acontecimientos electorales de 1988, cuyos resultados siguen siendo controvertidos, la bancada del PRI en la Cámara de Diputados implementó una estrategia que en el futuro le permitiera ganar el voto desfavorable de la mayoría. La duda sobre la legitimidad del origen de la autoridad del presidente de la república, Carlos Salinas de Gortari orilló a los reclamos de limpieza electoral en los primeros días de su mandato, tónica que marcaría el rumbo de su gestión; de ahí que uno de los objetivos centrales de su administración fuera desde el principio de su mandato, reformar el aparato electoral, cuya implementación fue la reforma electoral de 1989. Cuyo antecedente fue la iniciativa del presidente de convocar a un diálogo nacional, a todas las fuerzas políticas de ese momento y la opinión pública, en enero de 1989, con el propósito de revisar la legislación electoral. Los aspectos centrales del debate fueron: la organización electoral, la integración de las cámaras de diputados y senadores, el régimen de partidos, los derechos políticos y responsabilidades, la calificación y lo contencioso electoral.

2.2.2.1.1 OBJETIVOS DE LA REFORMA ELECTORAL DE 1989

La situación de descrédito en que cayeron las instancias electorales después de las elecciones federales de 1988 y la necesidad de replantear las relaciones entre las distintas organizaciones políticas, plantearon los puntos de la discusión que llevó a la reforma electoral de 1989, proponiendo como objetivos centrales, dos propósitos, los cuales se pueden identificar como:

- a) Dotar a los órganos electorales de mayor legitimidad.
- b) Tender puentes de la legitimidad y legalidad de las elecciones.

Para cuya consecución se acordaron diversas transformaciones, traducidas al cuerpo jurídico, que dio forma a la reforma electoral de 1989. Tales transformaciones pueden diferenciarse de acuerdo al objetivo que atendían.

En primer término, para satisfacer la necesidad de un instrumento que permitiera regular la competencia política entre los actores del proceso, como acuerdo del denominado "consenso entre las diversas fuerzas" y como una condición para rescatar la credibilidad en los órganos electorales, se cambió la Comisión Federal Electoral por el Instituto Federal Electoral, el cual debería desempeñar sus funciones con autonomía de las instancias gubernamentales además de contar con presupuesto y personalidad jurídica propios.

Para su mejor desempeño se pensó integrarla en dos ramas estratégicas:

- a) la primera integra la parte política del aparato, conformada por los consejos General, Local y Distrital;

b) la segunda, comprende la parte organizativa y operativa del aparato, que es la encargada de conducir los procesos electorales. Esta estructurada estaría formada por las juntas electorales en mismos tres niveles, es decir, General, Local y Distrital.

Así nace el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), que en términos reales sería la columna vertebral de todo el cuerpo político, que sustituye al Código Federal Electoral (Art. 41 Constitucional), y debería organizar los siguientes comicios. En 1990, en el seno de la Comisión Federal Electoral (IFE) se tomó el acuerdo de elaborar un nuevo padrón electoral, o lista de ciudadanos que cumpliera con los requisitos para sufragar⁸, por ser este el instrumento que permite organizar los procesos electorales y un mecanismo⁹ que permite controlar el número de sufragios para cada fuerza política.

En segundo término, para tender los puentes que legalicen las elecciones, se integran al Consejo General del IFE los representantes de los partidos mayoritarios y de la primera minoría de las cámaras, medida que sin duda, marca un precedente histórico, porque por primera los partidos políticos participan en la máxima estructura electoral. Asimismo, se elimina el voto de calidad que tenía el Secretario de

⁸ Se acuerda que la lista nominal de electores debe contener el nombre de los empadronados y su domicilio y el número total de personas que tienen su credencial para votar, asimismo que entregue a los partidos políticos y se presente públicamente ante la ciudadanía.

⁹ Este nuevo instrumento electoral, que es considerado como uno de los más sofisticados y avanzados del mundo porque tiene elementos de seguridad que impiden su falsificación, destacando: Nombre del elector, sexo, edad, domicilio, fotografía, firma, código de barras, huella digital, folio único consecutivo individual, folio de la solicitud de inscripción para su control a nivel nacional, año de registro en el padrón, clave del elector, número de credenciales proporcionado al ciudadano por causa de robo, extravío o cambio de domicilio; además de contar con los datos del estado, municipio o delegación, localidad y sección electoral al que corresponde el elector. Su aprobación el 19 de julio de 1992 fue un logro importante en el camino para la construcción de una democracia electoral más efectiva, de frente a los comicios federales de 1994.

Gobernación, dejando de este modo gran parte de las decisiones en manos de los consejeros ciudadanos.

Se crea una fórmula que permite la presencia de los partidos políticos de acuerdo a la proporción de votos obtenidos durante la jornada electoral, lo cual de entrada elimina la mayoría que tenía el PRI en la Comisión Federal Electoral de 1988, este fórmula es la de primera y segunda minoría. También se reconoce un comisionado si la votación del partido oscila entre el 1.5% y el 10% en comicios federales; dos comisionados si esta se encuentra entre el 10% y el 20%; tres comisionados si la votación se encuentra en los márgenes del 20% y el 30%; y cuatro comisionados si esta supera los 30% puntos porcentuales. En lugar de dos representantes del poder legislativo en la estructura del IFE ahora hay cuatro; dos diputados y dos senadores. Se crea el servicio profesional electoral, con el objetivo de capacitar a los funcionarios electorales que prestan sus servicios en IFE, para evitar de este modo las deficiencias y tener así un aparato más profesional en las tareas electorales.

Otro aspecto fundamental que atiende la reforma de 1989 es el correspondiente al quehacer del Tribunal de lo Contencioso Electoral, al cual se reconocen mayores atribuciones para resolver las impugnaciones de los partidos políticos. Esta innovación consiste en reconocer mayor peso a las resoluciones del Tribunal las que para poder modificarlas (sus conclusiones y resoluciones) tendrán que pasar por las dos terceras partes del Colegio Electoral.

La implementación de esta reforma, permitió votar por primera vez, a los ciudadanos en tránsito, en 1991, en respuesta a los reclamos de la oposición; por lo que se acordó instalar 930 casillas especiales con 750 boletas para cada una.

2.2.2.2 LA REFORMA ELECTORAL DE 1993

La reforma de 1989 no fue suficiente para restablecer la credibilidad y confianza en los procesos electorales, lo que originó que de frente a las elecciones de 1994 los principales partidos políticos PRI, PAN y PRD impulsaran una nueva reforma electoral. Esta nueva reforma fue terminada entre los meses agosto y septiembre de 1993, pero, a pesar de mostrar avances siguió limitando la participación de la oposición, por lo que se le considera como una reforma calculada para no permitirle más espacios a la izquierda en los órganos de dirección de los comicios, como en los Comités Distritales y los Distritos electorales de tal modo que el control directo de la organización, vigilancia y ejecución de los comicios siguió en manos del PRI representado en el IFE.

2.2.2.2.1 OBJETIVOS DE LA REFORMA ELECTORAL

El temor de una presencia amplia de la oposición en la cámara de diputados, orilló al presidente en turno y al PRI, proponer una nueva reforma electoral, en previsión de las elecciones federales de 1994. Esta nueva reforma conjugó las reformas de 1989 y

1993, sin embargo, en términos generales resultó una contrareforma en el sentido de que amplió espacios de participación pero retrajo las posibilidades de una presencia opositora en el Congreso.

Uno de los objetivos centrales de esta reforma fue contener la posibilidad de que un partido de oposición se convirtiera en mayoría predominante en la Cámara de diputados, y para prevenir tal eventualidad, planteó la eliminación de la "Cláusula de Gobernabilidad" que permitía a cualquier partido político que obtuviera el 35% de la votación emitida y el mayor número de Diputados de mayoría relativa, tener la mayoría absoluta en el recinto legislativo. Este es el principio sobre el cual pudo el PRI mantener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en años anteriores, al posibilitarle al partido que alcanzara los márgenes de elección mencionado, ocupar el 50% mas 1 de los escaños.

Un segundo objetivo fue ampliar la presencia de la oposición en el Congreso, al abrir a las minorías Cámara de Senadores mediante la ampliación de 2 a 4 escaños por entidad, de los cuales, tres serían elegidos por el principio de mayoría y el último por el principio de primera minoría electoral, dando pie con ello a la participación en el Senado, a partidos que bajo otras circunstancias no hubieran obtenido representación.

Un tercer objetivo fue prevenir la posibilidad de que un partido, basado en su mayoría legislativa pudiera modificar la Constitución, para lo cual se estableció el candado de que el partido que hubiera conseguido el triunfo electoral, no podría tener por sí sólo más del 63% de los escaños en la Cámara de Diputados, esto es,

bajo la forma actual de integración de dicha cámara, no podría tener más de 315 diputados. Esto implica, que un partido por sí solo no podría modificar la Constitución ya que para hacerlo es requisito indispensable una mayoría calificada del 66%, es decir, cuando menos 330 diputados estando todos presentes, lo que obligaría al partido ganador a establecer alianzas con otros partidos, limitando también la discrecionalidad del poder ejecutivo (el régimen presidencialista) de poder enmendar la constitución a iniciativa propia. Los métodos utilizados para la asignación de Diputados también cambiaron sustancialmente en relación a los anteriores.

A partir de esta reforma se usan herramientas matemáticas más complejas, para proceder a la repartición general de Diputados de representación proporcional. Dicho procedimiento indica que se debe aplicar una fórmula para obtener el "Cociente natural" (CN), que es el resultado de dividir el número de votos emitidos en una circunscripción, entre el número de escaños de representación proporcional a repartir entre los partidos contendientes. El procedimiento consiste en asignar una curul al partido que haya obtenido la votación más alta, descontándole el CN, para obtener el resto de votos que le quedan. Si aún quedan curules por repartir, el siguiente se asigna a quien tenga el resto mayor y así sucesivamente hasta agotar el número de escaños por repartir.

En un ejemplo hipotético:

En una circunscripción en donde obtuvieron votación los partidos:

**REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL**

Cuadro No 7

Partidos	Votos obtenidos
A	85000
B	55000
C	44000
D	32000
E	28000
5	244000

Aplicando la fórmula, el CN es igual al cociente del total de votos emitidos, entre el número de escaños a repartir. Suponiendo que son 7 escaños, el cociente natural es igual a 34000.

RESULTADO DE APLICACIÓN DE LA FÓRMULA

Cuadro No 8

Partido	Votos	Curules por CN	Resto de votación	Curules por resto	Resto de votación	Curules por resto
A	85000	1	51000	1	17000	0
B	55000	1	21000	0	21000	1
C	44000	1	10000	0	10000	0
D	32000	0	32000	1	0	0
E	28000	0	28000	1	0	0

Cuyo resultado es la asignación de curules por partido:

**CURURLE POR
PARTIDO**

Cuadro No 9

Partido	Votos	Curules
A	85000	2
B	55000	2
C	44000	1
D	32000	1
E	28000	1

Esta fórmula permite asignar el número total de Diputados de representación proporcional que tendrá cada partido de acuerdo a su votación nacional.

Para darle mayor credibilidad al IFE, esta reforma plantea por un lado, el control del financiamiento público a los partidos políticos a través del IFE mismo, además reglamenta otras fuentes posibles, para la obtención de recursos tales como: cuotas de los afiliados, simpatizantes, rendimientos financieros, autofinanciamiento y la creación de fondos y fideicomisos, con la finalidad de acotar las fuentes de recursos y hacer más transparente el origen de los mismos; en tanto por otro lado, prohíbe la obtención de financiamiento proveniente directamente de los órganos de gobierno, de organizaciones, partidos y personas extranjeras, o de quienes trabajen o vivan fuera del país, como tampoco pueden hacerlo las empresas de carácter mercantil, ni las iglesias o ministros de culto.

Esta reglamentación debería restringir la canalización de recursos al partido oficial por parte de los gobiernos federal, estatal, municipal y de las dependencias públicas, así como evitar la obtención de financiamiento de dudosa procedencia. También limita las posibilidades de los candidatos a recibir personalmente cualquier tipo de financiamiento, ni a manejarlos de manera personal por lo que cada partido deberá de administrar sus recursos por medio de sus órganos financieros.

Asimismo pone tope a los gastos de campaña a los partidos, en proporción a la cantidad de electores expresados por ellos en la elección anterior y a la extensión territorial donde tienen influencia, en ese mismo sentido, los partidos deben rendir

cuentas pormenorizadas de todos sus movimientos financieros ante el IFE, y, de encontrarse irregularidades, se les sancionará incluso con la pérdida del registro.

Con la finalidad de asegurar la difusión de las campañas, la reforma establece que el Estado seguirá asignando tiempo de Radio y Televisión a los partidos políticos; otorgarles facilidades para contratar por su cuenta espacios en los medios privados de comunicación.

Entre otras atribuciones que establece esta reforma, el Consejo General del IFE debe nombrar al Secretario General del mismo con el voto de dos terceras partes de sus integrantes, de entre los candidatos propuestos por el director General, es decir, la designación del Secretario General ya no se hará más por mayoría simple ni por el Consejero Presidente del IFE. También se designará por el mismo procedimiento a los directores ejecutivos, a propuesta del director General, de los candidatos viables para ocupar los puestos.

Centralmente la reforma estipula que para aspirar al cargo de Director del IFE, el candidato tendrá que cumplir con los siguientes requisitos:

- No estar desempeñando o haber desempeñado el cargo de presidente de Comité Nacional de un partido político.
- No haber desempeñado algún puesto de elección popular en los últimos cinco años.
- No estar desempeñando ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal de algún partido en los últimos cinco años anteriores.

Otro aporte de la reforma es que el IFE elegiría a funcionarios extraídos de la sociedad, con el fin de hacerlos especialistas en la materia, a través del servicio profesional electoral, por ser este uno de los puntos donde más reclamos planteó la oposición, argumentado que la improvisación era la característica de cada proceso electoral, lo que originaba como consecuencia una serie de errores que podrían resolverse de contar con personal capacitado.

En previsión de los comicios de 1994 se evaluaba la posibilidad de que toda la población que estuviera en condiciones de votar lo hiciera, por lo que se calculaba la expedición de aproximadamente 40 millones de credenciales. Cabe destacar que esta credencial contó con fotografía, por primera vez en unas elecciones federales, por lo que se pensaba, sería una garantía más en la búsqueda de la transparencia electoral que tanto se anhelaba.

Respecto a los funcionarios de casillas, la reforma establece que el IFE deberá elegirlos de entre los integrantes del padrón electoral, por medio de un sorteo, para evitar que estos funcionarios fueran tomados de entre las filas del PRI, únicamente. Por primera vez también, el IFE acepta la importancia de las encuestas electorales de los conteos rápidos y las encuestas de salida, con lo que se establece un precedente en la historia electoral de este país, pues contando con tales recursos, los partidos podrán disponer de información que les permitiera conocer las tendencias durante el transcurso de las elecciones y no esperarse ocho días para conocer los resultados; lo cual contribuye a disminuir las posibilidades del fraude electoral. Tales estudios sólo pueden hacerse públicos después de las diez de la noche del día de los comicios; en

tanto que las encuestas, queda estrictamente prohibida su difusión y publicación ocho días antes de las elecciones y hasta el cierre de casillas, bajo el entendido de que quién solicite encuestas u ordene su publicación, tendría que enviar una copia completa al IFE. Para los conteos rápidos y encuestas de salida, la ley establece que cada empresa o partido interesados en ellos tendrán que someter a la consideración del IFE la metodología correspondiente.

En lo que toca a los resultados de la jornada electoral, el Director General del IFE es quien debe informar de las tendencias electorales después de la culminación de los comicios, es decir, después de las seis de la tarde, lo cual contribuiría a eliminar la espera para conocer los primeros resultados, y también reduciría las posibilidades del fraude electoral.

Respecto a la calificación de las elecciones la reforma eliminó los colegios electorales tanto de Diputados como de Senadores. En contraparte establece que tales atribuciones corresponden al IFE. Con esta medida, se pretendió mayor transparencia e imparcialidad en los resultados de los comicios. Para las elecciones de 1994, estas funciones pasaron a manos de los órganos electorales, de tal modo que el consejo general del IFE, calificó la elección de Diputados de Representación Proporcional; los Consejos Distritales calificaron a los Diputados de Mayoría Relativa, y los Consejos Locales calificaran la elección para Senadores.

Con relación a los recursos de inconformidad, se amplía el número de pruebas que los partidos pueden utilizar así como la simplificación de los medios de impugnación, ampliando las atribuciones de los partidos, pues ahora, estos podrán protestar ante el

Tribunal Federal Electoral (TRIFE)¹⁰, inclusive una calificación que el IFE haya dado por válida. Para tal efecto se instala la sala de segunda instancia del TRIFE, que tiene como función principal resolver las inconformidades en cuanto a la calificación de las elecciones, en definitiva y última etapa.

Por último, es de suma importancia destacar que esta reforma electoral incorpora por primera vez la figura de "Observadores Electorales Nacionales", lo que permitió que los comicios de 1994, fueran los más vigilados en la historia reciente de las elecciones en el país, pues a los representantes de los partidos en las casillas, los medios masivos de comunicación, principalmente la prensa escrita, sin soslayar un número importante de empresas que estarán cubriendo las actividades, se sumaron los observadores.

Finalmente, se eliminó el registro condicionado de los partidos como condición a una elección y se amplía a una segunda ronda electoral, ante cuyos resultados, de ser adversos orillarán el retiro del registro y todo tipo de prerrogativas por parte del gobierno.

2.3 EL SISTEMA DE PARTIDOS

Los sistemas de partidos son fenómenos relativamente recientes en el mundo político occidental. Surgieron en sus formas incipientes durante la segunda mitad del siglo XIX y fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando los partidos se

¹⁰ Dicho órgano estará constituido por el Presidente del Tribunal Federal Electoral más cuatro elementos de la

consolidaron como instrumento privilegiado de organización política, como vínculo de comunicación entre gobernantes y gobernados y de conformación de la representación política de la ciudadanía.

En este sentido, los partidos asumen el papel de mediadores entre la sociedad civil y la sociedad política en la negociación de la representación y el diseño del proyecto de sociedad a seguir.

En tal escenario, los partidos deben cumplir con determinados requerimientos, los que les permiten identificarlos conforme a las demandas y signo ideológico que representan. Los partidos políticos surgieron como una evolución positiva de las facciones políticas, diferenciándose de aquellas en que mientras las facciones persiguen el beneficio inmediato de sus miembros, los partidos persiguen el beneficio del conjunto e la sociedad.

Esto los obliga a elaborar y promover un proyecto político que satisfaga las aspiraciones tanto de sus miembros como de otros individuos y sectores que conforman la sociedad.

Los partidos para ser tales deben reconocerse como parte de un todo que los supera. Cada partido esta obligado a reconocer la existencia de otros partidos y aceptar que éstos también pueden organizar y promover proyectos políticos, incluso radicalmente distintos al suyo. Un partido, asimismo, debe decidirse a ser gobierno. La contienda por el poder debe adecuarse a mecanismos democráticos que dejen satisfechos al conjunto de los actores políticos y a la población electora. La característica central de

los partidos es que están obligados a reconocerse en la contienda político electoral como actores principalísimos de la lucha por el poder. Los partidos son leales al sistema político cuando reconocen en el campo electoral, y sólo en él, los mecanismos básicos para la obtención del poder y su consecuente ejercicio.

Sólo donde hay partidos puede existir un sistema de partidos. Este es el producto de la competencia leal entre los diversos partidos políticos. Para construir un sistema, los partidos se requiere de garantías elementales que permitan su supervivencia una vez que cualquiera de los protagonistas asuma funciones de gobierno.

En tal sentido el Sistema de partidos es el espacio de competencia leal entre los partidos, orientado hacia la obtención y el ejercicio del poder político.

En México los partidos políticos no han desempeñado el papel que teóricamente les corresponde sino que durante mucho tiempo fue uno el partido dominante, por lo tanto, el que obtenía los triunfos en las elecciones, por medio cualquier artimaña, según conviniera a sus intereses. Fue hasta 1977 cuando se abre un espacio de participación a otros partidos, a través de la LOPPE, sometiéndolos a cumplir con determinados requisitos, establecidos por la misma ley.

Fue hasta la década de los ochenta cuando se crea un sistema de partidos más competitivo¹¹. El sistema de partidos propiamente dicho surge a partir de 1988, con la formación del PRD, partido que completa el cuadro político, al completar el abanico de partidos, con el PAN de tendencia de derecha y el nuevo identificado como de la izquierda.

Por su parte, Sartori (1987), ocupa dos conceptos básicos para hacer una aproximación de la competencia "la competencia es una estructura o una regla de juego", por otro lado, la competitividad "es un estado concreto del juego", es decir, si en el caso mexicano hubo partidos, no siempre contaron con las posibilidades para llegar al poder, esto es, que no había competitividad. En tal perspectiva, Sartori clasifica los sistemas de partidos en:

- Sistema competitivo: Cualquier partido tiene la oportunidad de llegar al poder.
- Sistema no-competitivo: No hay competencia real, y podría haber un sólo partido.

Conforme al autor, el caso mexicano corresponde a un sistema de partidos que al menos durante los setenta años de predominio del Estado de Bienestar, no fue un sistema competitivo sino uno no-competitivo, debido a que el partido hegemónico, el PRI, fue el que ganaba las elecciones sin posibilidades reales de competencia.

En un mayor acercamiento, el caso mexicano encuadra en el esquema del partido hegemónico pragmático, conforme a Sartori, el cual reviste las siguientes características:

- Inclusivo. El partido formula los principios generales que le permiten reivindicarse como el representante de la sociedad, para lo cual, recurrió inclusive al corporativismo, mediante el cual incorporó a los distintos sectores sociales a su membresía.
- Agregador. El partido mantiene un programa permanente de absorción de los sectores aún no incorporados a sus filas, mediante la incorporación de nuevas

¹¹ Una comunidad política sigue las normas de la competencia cuando en el momento de las elecciones casi

demandas a su cuadro de reivindicaciones políticas y sociales, creando los sectores específicos de militantes. Dentro de los cuales aparecen grupos específicos, por ejemplo, dentro del sector campesino pueden identificarse los productores de caña, de café, etc.

- Con elecciones regulares. Con la finalidad de mantener una presencia institucional del partido en el ánimo de la población, el propio sistema convocaba a elecciones periódicamente, pese a que no hubiera una competitividad real.
- Existe oposición. En México han existido partidos políticos de distinto signo, pero, bajo el sistema de régimen de partido único, no tenían posibilidades reales de obtener el poder, o simplemente cumplían con el papel de "partido satélite", según Sartori (1987).
- Fraude electoral. El sistema de partido único recurrió a diversos mecanismos que le permitieran obtener la votación mayor, que a su vez legitimara la presencia del partido en el poder.

SISTEMA DE PARTIDOS

Cuadro No 10

Sistema de partido único	Sistema de partido hegemónico:
Totalitario Autoritario Pragmático	Partido hegemónico-ideológico Partido hegemónico pragmático México

Fuente: Sartori, G. 1987. Partidos y sistemas de partidos. Ed. Alianza editorial, Madrid.

En cierto sentido son los partidos políticos, representados en las cámaras y en los órganos parlamentarios a través de diputados y senadores, los que deciden si las

todos, o todos, los escaños se disputan entre dos o más candidatos al puesto.

fórmulas electorales debe conservarse o modificarse. Pero antes de hacerlo, los parlamentarios determinan los posibles efectos mecánicos y psicológicos de una determinada fórmula y bajo qué condiciones, buscarán que beneficie a su partido; por lógica no aceptarán que lo perjudique.

Esta es la ilusión del legislador, ya que el resultado de un sistema electoral sobre la conformación de los órganos de representación política y la constitución de un sistema de partidos depende, de los ciudadanos.

CAPÍTULO 3

EL RÉGIMEN POLÍTICO MEXICANO

Los grandes cambios políticos o en su defecto las transiciones se inician en el régimen político, el cual asume distintas características, a partir de del tipo de instituciones que lo conforman. En México, desde la época posrevolucionaria, se vive un régimen político presidencialista, que ha ido modificándose pero sin atentar directamente contra sí mismo, de manera que durante años se reformó y fortaleció a través de las distintas reformas políticas.

Tales reformas fueron orientando comportamientos de tipo electoral y de participación de partidos, hasta desembocar en un proceso que para muchos analistas puede definirse como una transición política.

El estudio de las transiciones puede abordarse desde dos conceptos diferentes: el régimen y el sistema político. En este capítulo se analizará el régimen político mexicano fuertemente determinado por el presidencialismo, abordando desde sus antecedentes, definición y repercusiones.

3.1 ANTECEDENTES

El primer sistema presidencial se dio en los Estados Unidos y aparece en la Constitución norteamericana de 1787. Esa ley fundamental configuró un nuevo tipo de relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo, que dio por resultado el régimen presidencial; por esta razón se ha considerado que la Constitución norteamericana estructura el sistema presidencial clásico.

“Los sistemas presidenciales se han inspirado en el modelo norteamericano: porque en Estados Unidos se creó, porque ahí ha funcionado, y bien. Sin embargo, no hay que desconocer que el régimen presidencial es sólo una pieza dentro del sistema político norteamericano, y no es posible hacer un diagnóstico sobre él si no se le relaciona con los poderes legislativo y judicial, con el sistema bipartidista, con el federalismo, es decir, con las otras piezas que lo configuran” [Carpizo.1978:12].

Es decir para que funcione el sistema presidencial se requiere de la combinación de distintos elementos que integran la forma de gobierno, sin dejar de lado las instituciones sino dándoles igual importancia dentro del sistema político.

“La característica esencial del sistema presidencial es la combinación de un presidente de la República electo con base en el sufragio universal, con un Congreso organizado en dos cámaras también electas, pero que no tienen facultades de gobierno. Además, el presidente es políticamente irresponsable ante el congreso y éste no puede ser disuelto [Espinoza.1999:28].

3.2 FUENTES DEL PRESIDENCIALISMO MEXICANO

Cuando en 1824 se creó el sistema presidencial mexicano, no podía ser resultado de la tradición, sino que se trataba de un experimento político nuevo en el país. De aquel entonces a nuestros días, el sistema presidencial se ha ido modificando a través de las Constituciones y de acuerdo con diversas reformas a las mismas y en cierto modo, también con los usos y costumbres, a partir de lo cual se ha formado un régimen con características propias. Las fuentes del sistema presidencial configurado en 1824 son dos: la Constitución norteamericana de 1787 y la Constitución española de 1812.

En las últimas décadas se le conoce al régimen político mexicano como autoritario, pero con un consenso que da una fachada de democrático, pero sin serlo en realidad, aunque en los discursos se hace llamar democrático autoritario construido alrededor de un presidente, apoyado en una estabilidad política conocida como principio de gobernabilidad. La combinación de la institución presidencial y al poder que el presidente ejerce ha posibilitado que hayamos vivido tiempos relativamente estables.

3.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA PRESIDENCIAL

El poder ejecutivo es unitario. Está depositado en un presidente que es, al mismo tiempo, jefe de estado y jefe de gobierno, cuyo origen y facultades¹ son:

¹ Estas características son compartidas en mayor o menor grado por los siguientes autores: Hurtado, J. 1999. Sistemas de gobierno y democracia. Ed. IFE. México., Sartori, G. 1994. Ingeniería constitucional comparada.

- 1) El presidente es electo por el pueblo y no por el poder legislativo, lo que le da independencia frente a éste.
- 2) El presidente nombra y remueve libremente a los secretarios de estado.
- 3) Ni el presidente ni los secretarios de estado son políticamente responsables ante el congreso.
- 4) Ni el presidente ni los secretarios de estado pueden ser miembros del congreso.
- 5) Ni el presidente puede estar afiliado a un partido diferente al de la mayoría en el congreso.
- 6) El presidente no puede disolver el congreso, pero el congreso no puede darle un voto de censura.

En nuestro país, sin lugar a dudas, el presidente es la pieza fundamental del sistema político y ejerce un predominio absoluto sobre los otros elementos políticos que configuran al sistema.

Las causas del predominio del presidente mexicano pueden ser variados, entre lo cuales destacan:

- a) Es el jefe del partido predominante, partido que está integrado por las grandes centrales obreras, campesinas y profesionales.
- b) El debilitamiento del poder legislativo, ya que la gran mayoría de los legisladores son miembros del partido predominante y saben que si se oponen al presidente las posibilidades de éxito que tienen son casi nulas y que seguramente están así frustrando su carrera política.

- c) La integración, en buena parte, de la suprema corte de justicia por elementos políticos que no se oponen a los asuntos en los cuales el presidente está interesado.
- d) La marcada influencia en la economía a través de los mecanismos del banco central, de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal, así como las amplias facultades que tiene en materia económica.
- e) La institucionalización del ejército, cuyos jefes dependen de él.
- f) La fuerte influencia en la opinión pública a través de los controles y facultades que tiene respecto a los medios masivos de comunicación.
- g) La concentración de recursos económicos en la federación, específicamente en el ejecutivo.
- h) Las facultades constitucionales y extraconstitucionales, como son la facultad de designar a su sucesor y a los gobernadores de las entidades federativas.
- i) La determinación de todos los aspectos internacionales en los cuales interviene el país, sin que para ello exista ningún freno en el senado.
- j) El gobierno directo de la región más importante, con mucho, del país, como lo es el distrito federal.
- k) Un elemento psicológico: que en lo general se acepta el papel predominante del ejecutivo sin que mayormente se le cuestione².

En México, sin lugar a duda, el presidente es la pieza fundamental del sistema político y predomina sobre el sistema político.

En opinión de Arturo González Cosío (1972), las causas de la concentración de poder en el ejecutivo mexicano son de índole diversa, entre las que destaca:

"La estructura del partido oficial, del que el presidente de la república es jefe indiscutible.

² Un sistema político es presidencial si, y sólo si, el jefe de Estado (el presidente): a) es electo popularmente; b) No puede ser despedido del cargo por una votación del Parlamento o Congreso durante su periodo preestablecido, y c) encabeza o dirige de alguna forma el gobierno que designa" Sartori, G. 1994. Ingeniería constitucional comparada. FCE, México. pág. 99.

- El debilitamiento de los caciques locales y regionales.
- La unidad burocrática de las centrales campesinas y obreras.
- El debilitamiento del ejército como instrumento político de sus jefes.
- La creciente centralización impositiva en asuntos fiscales.
- El aumento de medios y vías de comunicación.
- El crecimiento hipertrófico de la capital”³.

En la actualidad existen dos formas fundamentales de gobierno: presidencialismo y parlamentarismo, cuyas combinaciones pueden dar una amplia gama de posibilidades de formas, cada una con diferencias que las distinguen entre sí, que pueden oscilar desde un gobierno autoritario hasta uno democrático.

³ Arturo González Cosío. 1972. Notas para un estudio sobre el estado mexicano, en México: Cuatro ensayo de sociología política. México. Universidad Nacional Autónoma de México. P.139. Citado en: Carpizo, J. 1978. El presidencialismo mexicano. Ed. Siglo XXI. México.

SISTEMAS DE GOBIERNO

Cuadro No 11

PRESIDENCIAL	PARLAMENTARIO
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> El presidente es jefe de Estado y de gobierno <input type="checkbox"/> El presidente es electo popularmente, directamente por un periodo fijo <input type="checkbox"/> El presidente no puede ser destituido por el Congreso y aquél no puede disolver a éste <input type="checkbox"/> El presidente tiene el control total del poder ejecutivo y dirige el gobierno <input type="checkbox"/> El gobierno es unipersonal y el gabinete sólo aconseja al presidente <input type="checkbox"/> Los ministros sólo son responsables ante el presidente <input type="checkbox"/> Se basa en el principio de separación de poderes 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Las jefaturas de Estado y de gobierno están separadas <input type="checkbox"/> La jefatura de Estado es por sucesión, designación o elección no popular, y la de gobierno emana del parlamento <input type="checkbox"/> El primer ministro puede ser destituido por el parlamento <input type="checkbox"/> El primer ministro puede recomendar al jefe de Estado. La disolución del parlamento <input type="checkbox"/> El primer ministro dirige, el gobierno compartiéndolo o controlándolo <input type="checkbox"/> El gobierno es colegiado; el gabinete toma decisiones colectivas y sus ministros deben apoyarlas <input type="checkbox"/> Los ministros son responsables ante el parlamento <input type="checkbox"/> Se basa en el principio de fusión de poderes

FUENTE: Hurtado, J. 1999. Sistemas de gobierno y democracia.

Cuadernos de divulgación de la cultura democrática No 19. IFE. México. Pág. 24.

En el sistema presidencial la actuación de los ciudadanos es de algún modo marginal, porque sólo se puede calificar, o sancionar cualquier situación cuando se acude a las urnas a elegir a los representantes del próximo gobierno, que en el caso del sistema parlamentario cualquier crisis política se resuelve con un llamado a elecciones anticipadas.

CONCLUSIONES

En las postrimerías del Siglo XX se constituyó en una moda en el lenguaje hablar de la transición y México no escapó a tal situación. La característica de este discurso, entre los especialistas en el tema es que difieren respecto a la fecha en que inició dicha transición y, en lo que parece haber coincidencia es que en 1977, con la promulgación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) se sientan las bases a partir de las cuales empieza a transformar el régimen político mexicano, sobre dos ejes fundamentales: las reformas políticas y electorales.

Tales modificaciones fueron elaboradas con la finalidad de dar respuestas a necesidades específicas, las cuales orientaron su formulación, de manera que expresan avances en algunos casos y, paradójicamente, retrocesos en otros.

Por ejemplo, la LOPPE de 1977 amplió el sistema de partidos, lo que expresa un avance en dicha reforma política en materia partidista, debido a que otorgó reconocimiento a partidos políticos con distintas ideologías que hasta aquel momento habían carecido de tal requisito, lo que significó un avance importante para el momento pero, avance que la reforma de 1986 retrocede al incrementar los requisitos para la creación de nuevos partidos políticos y conservación del registro a los ya existentes.

Indudablemente que en la base de tales transformaciones se encontraba la falta de credibilidad de la población en el sistema electoral vigente, dominado y controlado por la elite gobernante desde la Secretaría de Gobernación. Tal falta de credibilidad

Recuperando de autores como Schmitter y O'Donnell, el término transición, se entiende como "el intervalo que se extiende entre un régimen político y otro" [Schmitter y O'Donnell.1994:18]

Este concepto es muy socorrido por los teóricos de la transición en México, sirviendo como elemento diferenciador, entre posturas divergentes al respecto. Por un lado se ubican quienes argumentan a favor de la existencia o proceso de una transición y por el otro, quienes sostienen que no hay tal transición. Unos y otros utilizan los mismos indicadores para dar una explicación de los acontecimientos que les permiten argumentar en uno y otro sentido y aún en el sentido de que la política está entrando en un retroceso en el mismo régimen.

En la argumentación se retoman las distintas reformas políticas y electorales que se han implementado a lo largo de las dos últimas décadas. La que se toma como indicador es la LOPPE, con la cual se abre el abanico partidista, en un momento en que había escasa y poca participación de los partidos en los procesos electorales, a partir de cuando algunos desaparecieron en tanto otros aparecieron. Casos ilustradores son por ejemplo el del PAN que conservó su registro a expensas de una actitud de sumisión ante el régimen político, en tanto otros, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y otros, se fundieron para formar organizaciones que pudieran cumplir con los requerimientos establecidos en la Ley, dándole un matiz de competencia de partidos a las elecciones, cuando en realidad era un sistema de partido único donde la pelea electoral se daba en dos niveles:

- Uno, donde el partido oficial, seguía controlando los mecanismos electorales que le permitían "ganar" los puestos electorales más importantes, de manera que mantenía los primeros lugares en el escalafón electoral, sin una competencia real que lo desbancara.
- Dos, donde la competencia se daba por ocupar los espacios de representación proporcional en la Cámara de Diputados, como forma de inclusión subordinada de otros partidos a la competencia electoral.

Con esta reforma, el partido en el poder se comienza a preocupar al ir perdiendo votos con el sistema de representación proporcional, debido a que la ciudadanía comienza a votar por otros partidos, debido a lo cual propone la reforma de 1986 mediante la cual se amplió de 100 a 200 el número de diputados de representación proporcional, lo que le permite, al partido del gobierno, en determinado momento recuperar gran parte de la Cámara de Diputados que había perdido. Pero, también comienza a condicionar el registro de nuevos partidos, al ampliar el número de requisitos para tal procedimiento, en otras palabras aseguraba en cada elección obtener una mayoría tanto en el congreso como la presidencia y restar fuerza a los distintos partidos que hayan alcanzado algún reparto en la representación proporcional. Además de este candado que le daba automáticamente las de ganar al partido oficial, al mismo tiempo impedía alguna posibilidad de que las alianzas entre los partidos opositores pudiera convertirse en mayoría.

Las reformas electorales de 1989, 1993 y 1994 siguieron la misma lógica de abrir y cerrar espacios a los partidos y a la participación ciudadana en las elecciones,

Derechos Humanos (CNDH), a partir de cuando se puede decir que se empiezan a dar los pasos hacia el respeto de los derechos civiles, algo que aún está en tele de juicio. Por último, la noción de Socialización que encierra la participación de la población en el reparto de la riqueza nacional en forma equitativa, en México no sólo no se ha avanzado en tal dirección sino por el contrario, coincidiendo con el periodo en que se adopta la transición como discurso político, los niveles de ingreso de la sectores cada vez más amplios de la población se han ido deteriorando, al grado de que según algunas evaluaciones, en los años recientes se ampliado más la brecha entre ricos y pobres: hay menos ricos cada vez más ricos y más pobres, cada vez más pobres. Y como complemento, la noción de los beneficios sociales que integran el otro componente de la socialización indican que ha incrementado el analfabetismo, la discriminación hacia los indígenas, discapacitados y algunos otros sectores de la sociedad, quienes que por falta de recursos o por defender sus ideologías no pueden hacer uso de los derechos que por ley les corresponde. Por lo tanto este último paso para transitar queda descartado del panorama nacional y político.

En tal sentido, la transición es un fenómeno que no ha alcanzado al régimen político mexicano aunque sí han habido cambios, los cuales no han alcanzado a transformar el régimen a otro, diferente.

Finalmente la transición política no implica necesariamente concluir en un régimen "democrático". No se puede determinar anticipadamente la naturaleza del régimen político o sistema de gobierno en que concluya la transición como tampoco el tipo o

variedad en que alguno de ellos se presente, como tampoco existe un solo modelo de democracia o un solo camino para llegar o acercarse a ella

Por otro lado, en fechas recientes se ha hablado de transición por el cambio de partido en el poder, y elite gobernante después de las elecciones del 2 de julio de 2000, sin embargo, en un primer acercamiento, significa solamente el cambio de personajes y partido en el poder, sin modificar sustancialmente el régimen político, lo que plantea de inmediato una serie de retos a futuro, tales como:

1. Reformas constitucionales para hacer más eficaz al gobierno.
2. Acotar el poder presidencial.
3. Crear un autentico poder judicial y fortalecer el federalismo.
4. Promover la autonomía municipal.

El país requiere de nuevas reformas electorales que garanticen los procesos electorales democráticos. Hasta ahora las reformas electorales se hicieron pensando en los partidos y no en los individuos, a los que se olvidó en las modificaciones legales de 1977, 1987, 1990 y 1996, por lo que resulta urgente e imprescindible establecer otros mecanismos de participación política, como las candidaturas ciudadanas, el plebiscito y el referéndum, la revocación del mandato, la rendición de cuentas y el derecho a la información ciudadana.

De no hacerse los cambios pertinentes la transición acabaría como un acuerdo de partidos y no una transición real. Asimismo, la transición política no puede venir por último si no se soluciona favorablemente el conflicto social de los años recientes, el levantamiento armado de los pueblos indígenas de Chiapas. Por lo tanto el tema de la

transición en México es todavía difuso, tanto por los mismos teóricos que al intentar explicar y ubicar fechas no hay un consenso, el tema de que ya termino o le falta poco o se inicia, son algunos de los nudos que faltan por resolver.

Todo lo cual plantea la interrogante acerca de qué nuevas reformas se implementarán durante el nuevo sexenio que inicia con un partido diferente al PRI en el poder, para conducir finalmente a la transición.

Así pues las transiciones han llegado a los distintos rincones del mundo, con diversos características y fines, pero en el caso mexicano, todavía no hay cambios que modifiquen por completo el régimen y al sistema político.

BIBLIOGRAFIA

- Aquilo, S. R. 1982. Ensayo de un diccionario de Política y Administración pública. Ed. Grijalbo. México.
1996. Una constitución para la democracia; propuesta para un nuevo orden constitucional. UNAM. México.
- Aristóteles. 1985. La política. Ed. Porrúa. México.
- Bobbio, N. 1981. Diccionario de política. Ed. Siglo XXI, Madrid.
- Camou, A. 1991. Once tesis sobre la transición en México, en *Revista Nexos*. No.
- Cancino, C. 1995. Construir la democracia: Límites y perspectivas de la transición en México. Ed. M.A. Porrúa, CIDE. México.
- "Pensar la transición", en *La Jornada semanal*. No 276. Septiembre 1999. México.
- Carpizo, J. 1978. El presidencialismo mexicano. Ed. Siglo XXI. México.
- Crespo, J.A. 1999. Fronteras democráticas en México. Ed. Oceano México.
- Espinoza, R. 1999. Sistemas parlamentario, presidencial y semipresidencial. Ed. IFE, México.
- Fernández R.O. "El Régimen Político Mexicano Prisionero de sus Dilemas" en *Revista Convergencia*. No. 3, junio. 1993. Ed. Universidad Autónoma del Estado de México. México.
- Flores, V. 1997. ¿Qué democracia para México?. Ed. Oceano, México.
- Gómez-Tagle, S. 1990. Las estadísticas electorales de la reforma política. Cuadernos del CES, No. 34, COLMEX, México.
- Held, D. 1987. Modelos de democracia. Ed. Alianza editorial, México.
- Huntington, S. 1990. El orden político en las sociedades en cambio. Ed. Paidós. Argentina.
1994. La tercera ola. Ed. Paidós. España.
- Loaeza, S. 1977. El partido Acción Nacional: la oposición leal en México. Lecturas de política mexicana. Colmex. México.
- "La incertidumbre política mexicana", en *Nexos*. No ---. Junio 1993. México.
- López J. 1993. Reformas Constitucionales para la modernización. Una visión de la modernización de México. Ed. FCE. México.
- Meyer, L. 1998. "¿Reforma del Estado o cambio de régimen?", en *Enfoque*, No. 207, 4 de enero de 1998. Ed.
- Meyer L. y Reyna J. 1989. México, el sistema y sus partidos: Entre el autoritarismo y la democracia. Los sistemas políticos en América Latina. Ed. Siglo XXI. México.
- Molinar, H.J. 1993. El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo y democracia en México. Ed. Cal y Arena. México.
- Morino, L. 1985. Como cambian los regímenes políticos. Ed. Centro de Estudios constitucionales, España.
- Núñez J. A. 1991. El nuevo sistema electoral. Ed. FEC. México.
- O'Donnel G. y Schmitter P. 1994. Transiciones desde un gobierno autoritario Ed. Paidós España.
- Pardo, R. 1997. Comunicación política y Transición democrática. Ed- UAM-Xochimilco, México.
- Peschard, J. 1994. La cultura política democrática. Cuadernos de divulgación de la cultura democrática. No 2. IFE. México.
- Przeworski, A. 1998. Democracia sustentable. Ed. Paidós, Argentina.
- Reyes J. 1996. Modernización política en México; elecciones y partidos y representación 1982-1994. Ed. UAM-Xochimilco, México.
- Rodríguez. 1989
- Sartori, G. 1987. Partidos y sistemas de partidos. Ed. Alianza editorial. Madrid.
- Sartori, G. 1994. Ingeniería constitucional comparada, FCE, México.

- Sodi, T.D. 1994. La transición inconclusa. Ed. UNAM-S.XXI. México.
- Stolowi, B. "Gobernabilidad o democracia: Los usos conservadores de la política", en Revista política y cultura. No. 8 UAM-Xochimilco. México.
- Valenzuela, A. 1999. El debate actual sobre el presidencialismo y parlamentarismo en América Latina. Col. Temas de la Democracia, serie Conferencias Magistrales, No. 7 IFE, México.
- Yocelzky, R. 1996. Experimentos con la democracia en América Latina. Ed. UAM-Xochimilco, México.

DOCUMENTOS

- COFIPE. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, IFE Septiembre 1999.
- Reforma política de 1963.
- Reforma política de 1977 (LOPPE).
- Reforma política-electoral de 1986.
- Reforma política de 1989.
- Reforma política de 1994.